

**A la sombra de las
DICTADURAS**

La democracia en América Latina

Alain Rouquié



IV. LA TENTACIÓN MAYORITARIA

LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA es una creación cultural continua caracterizada, según Samuel Huntington, por un “alto grado de creatividad y de elaboración en la institucionalización de las prácticas y los procedimientos políticos”.¹ Los regímenes constitucionales pluralistas descansan en la estilización y la codificación de las luchas políticas. Las campañas electorales, los ritos parlamentarios son la expresión simbólica de rivalidades que también podrían ser violentas. Pero el juego político democrático está marcado justamente por la “imposición de reglas estrictas, el mantenimiento de un marco espacial y temporal en cuyo interior los actores deben mantenerse”,² señalaba Raymond Aron. Porque, añadía, “para aquellos que están en el poder, es fuerte la tentación de no exponerse al riesgo de perderlo, y para aquellos que están excluidos de él, de utilizar los medios legalmente prohibidos para adueñárselo”. Y esta tentación constituye el horizonte maldito del misterio democrático, que lleva a los actores a liberarse de los topes institucionales, ya que el poder absoluto es absolutamente natural y la democracia, un frágil milagro cultural.

Esta propensión es tanto más fuerte cuanto menos vigorosa es la “virtud”, motor del gobierno republicano. *Del espíritu de las leyes* define a la virtud como “una renuncia a sí

¹ Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*, New Haven, Yale University Press, 1968, p. 125 [trad. esp.: *El orden político en las sociedades en cambio*, Barcelona, Paidós Ibérica, 1996].

² Raymond Aron, *Essai sur les libertés*, París, Calmann-Lévy, 1965, p. 85 [trad. esp.: *Ensayo sobre las libertades*, Madrid, Alianza, 1990].

mismo, que siempre es algo penoso",³ en otras palabras, como la capacidad cultural de resistir a su propia fuerza y el dominio de sí indispensable para la aceptación de las prácticas simbólicas. Pero esta excepcional "autocoerción" obviamente no es ni espontánea ni fácil de llevar a cabo. Y la tentación tiene más posibilidades de ser superada o controlada si existe cierta coincidencia, una relativa superposición entre las relaciones de autoridad en el seno del sistema político y las estructuras de la sociedad. El principio de la igualdad política, esencia del funcionamiento de las democracias, está por el contrario amenazado (hasta impugnado) por la amplitud de los desvíos sociales. Entonces es grande el riesgo de ver que los enfrentamientos de la sociedad se salen de los sitios propios y simbólicos de la "escena de conflictividad",⁴ donde uno habla y representa las diferencias y los enfrentamientos.

Como consecuencia de esto, las sociedades no igualitarias evidentemente no favorecen la estabilidad republicana. En líneas más generales, la conciencia normativa allí está poco afianzada. La verticalidad y el particularismo de las relaciones sociales dibujan un universalismo jurídico sesgado. Las leyes, a menudo no aplicadas, a veces inaplicables, a lo sumo figuran como un objetivo lejano. Las instituciones judiciales no escapan al poco respeto por la legalidad. Ahora bien, las elecciones no hacen por sí solas la democracia, también se necesita el Estado de derecho y el ejercicio reglamentado del poder. A causa de eso, el desafío permanente al que se ven enfrentados ciertos Estados de América Latina, incluso en el siglo XXI, puede resumirse de este modo: ¿cómo construir la democracia con no demócratas? Es así como en el período de consolidación postautoritaria de los

³ Montesquieu, *L'Esprit des lois*, libro IV, cap. V [trad. esp.: *Del espíritu de las leyes*, Madrid, Alianza, 2003].

⁴ Marcel Gauchet, "Tocqueville, l'Amérique et nous. Sur la genèse des sociétés démocratiques", en *Libre*, París, 1980, núm. 7, pp. 50-52.

regímenes representativos se produjeron los percances y los desvíos más diversos, donde en ocasiones se creyó percibir el bosquejo de nuevos modelos políticos.

LA VÍA DEMOCRÁTICA EN LA AUTOCRACIA

Las dictaduras no siempre surgieron de perturbaciones violentas o intervenciones exteriores. La historia registra numerosos casos de regímenes autoritarios instaurados por el sufragio universal en un marco constitucional. Las consultas en sentido único y las elecciones "terminales" muchas veces llevaron al poder a un partido o un hombre cuyo programa implicaba la destrucción del pluralismo y la supresión de los derechos civiles y políticos. Hitler, Mussolini o incluso el "golpe de Praga" lo testimonian en nuestro trágico siglo XX europeo. Más cerca de nosotros en el tiempo, algunos partidos islámicos hostiles a la doctrina impía de la soberanía del pueblo no ocultaron que encaraban las elecciones en caso de victoria según la fórmula: "un hombre, un voto, una sola vez".

América Latina no escapó a los golpes de Estado internos de presidentes electos. Se trata aquí de un caso particular muy diferente al de las democracias de fachada, en las cuales el partido dominante o el hombre fuerte recurren a elecciones pero no deben al sufragio su llegada al poder. Para no tomar aquí más que un ejemplo, y en este caso el más logrado, los diez años de presidencia de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000) representan un modelo de evolución autocrática de un jefe de Estado electo y popular.

A fines de los años ochenta, Perú conoce una situación muy difícil, algunos dirán catastrófica. Golpeado en toda su extensión por la crisis de la deuda y la baja de los precios de las materias primas, el país debe enfrentar una inflación galopante y guerrillas de gran amplitud que hacen pesar una fuerte amenaza sobre la democracia. Frente a semejante si-

tuación, los partidos políticos están desacreditados y exangües. La izquierda está paralizada por el terrorismo revolucionario. La más sólida y popular de las formaciones tradicionales, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA),⁵ acaba de desacreditarse en el poder. El joven e impetuoso presidente “aprista” saliente, Alan García, llevó a cabo con obstinación una política nacionalista y errática de expansión de los gastos, muy onerosa para el país. Más tarde, al hacer su autocrítica, lamentará el “delirio estatista” de su gobierno, que según va a explicar es herencia de la dictadura militar de izquierda de Velasco Alvarado.⁶ La crisis de representación abre la vía de la presidencia a candidatos sin partido. Dos *outsiders*, ambos ajenos al mundo político, van a enfrentarse a partir de entonces en el curso de elecciones disputadas con final incierto: un profesor de universidad técnica desconocido, de origen japonés, y una personalidad mundialmente reconocida, el novelista Mario Vargas Llosa, favorito de los sondeos.

Este último, apoyado por el *establishment* político y social, enarbola la bandera del liberalismo antiestatista. Anuncia un tratamiento de choque para reordenar las finanzas, acabar con la inflación, detener la hemorragia. El ingeniero Alberto Fujimori, a la cabeza de una coalición heteroclita donde los evangelistas son muy activos, no dice nada de su programa económico salvo un eslogan destinado a tranquilizar: “Honestidad, trabajo, tecnología”. El *nikkei*, hijo de japoneses, finalmente es elegido presidente. El electorado popular de la nación mestiza prefirió “el chino” al intelectual blanco cosmopolita y refinado, porque Fujimori, “un candi-

⁵ La APRA había sido fundada en 1924 por el peruano Haya de la Torre, como un partido de aspiración continental, indigenista y antiimperialista. A partir de 1931, la APRA se convirtió en un partido popular peruano de tendencia socialdemócrata.

⁶ Alan García, *La revolución constructiva del aprismo*, Lima, s. e., 2006, p. 105.

dato como tú”, decía su propaganda, fue naturalmente asociado a los pobres, a los cholos.

La situación que espera al nuevo presidente no es nada brillante. La debacle económica se refuerza con una amenaza terrorista que gana terreno. El movimiento armado maoísta de Sendero Luminoso, nacido en la universidad andina de Ayacucho, se extiende entonces y alcanza las ciudades. Bajo la dirección de un profesor de filosofía iluminado (“presidente Gonzalo”, “cuarta espada del marxismo-leninismo”), el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso lanzó en los años ochenta una “guerra popular prolongada” de una violencia tan implacable como inédita en estas latitudes. Ataca al Estado, ejecuta a sus representantes y a las autoridades locales. Siembra el terror en la campaña tratando de imponer un orden totalitario. Al lado de estos estalinistas apocalípticos, la guerrilla urbana del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que une guevarismo e indigenismo, parece casi moderada, pero no es menos activa.

Fujimori va a atacar a la vez la amenaza de la hiperinflación y el terrorismo en un estilo que está en las antípodas de la tradición política nacional. Afirma la preponderancia presidencial, decide sin consultar y practica el hecho consumado.

El presidente gobierna sin partido, y el movimiento que lo llevó a la presidencia es a su vez marginado en nombre de la “democracia directa”. Así, Fujimori se presenta como el hombre que rechaza los compromisos (“que no se casa con nadie”). Tecnócrata puro y duro, habla directamente al pueblo por encima de las mediaciones parlamentarias. Perú ha entrado en la “década de la antipolítica”, dice un analista, en la cual los conceptos de “alianza, coalición, negociación, acuerdo o consenso se transformaron en obscenidades”.⁷

⁷ Carlos Iván Degregori, *La década de la antipolítica (auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos)*, Lima, IEP, 2001, p. 52.

Contra la inflación, Fujimori aplica el tratamiento de choque liberal y la severa política de ajuste que figuraba en el programa de Vargas Llosa. El "Fujichoc" libera los precios y los servicios, suprime las subvenciones, privatiza numerosas empresas públicas, reduce los gastos, impone la desregulación del mercado de trabajo.⁸ El número de funcionarios baja a la mitad. Mientras que algunas industrias desaparecen, los salarios caen, así como la tasa de sindicalización. El trabajo precario se desarrolla, el consumo se achica y la economía se "reprimariza". Pero el método fuerte del doctor Fujimori fue eficaz. La tasa de inflación mensual, que alcanzaba el 63% en julio de 1990, es inferior al 4% en diciembre de 1992, y de sólo el 0,6% en diciembre de 1994.⁹

En forma paralela, con ese mismo vigor que no se inquietaba por precauciones legales, Fujimori declara la guerra al terrorismo. Para eso descarta todos los obstáculos. Mediante una serie de decretos leyes, amplía los poderes de las fuerzas de seguridad y limita las libertades públicas. El Congreso, que fue pasado por alto, protesta. Los parlamentarios, habituados a la negociación y los entendimientos partidarios, no aprecian mucho el estilo expeditivo de este presidente que no los consulta. Es cierto que el jefe de Estado sólo dispone de menos de un tercio de las bancas en el Parlamento... El Senado, por lo tanto, se siente en el deber de anular algunos decretos leyes. Fujimori disuelve el Congreso, lisa y llanamente. No es una decisión constitucional, sino un golpe de Estado que tiene lugar el 5 de abril de 1992, apenas 12 años después del retorno de la democracia: la Constitución es suspendida; las autoridades regionales

⁸ Véase Javier Herrera, "Ajustement et mobilité politique à Lima", en *Problèmes d'Amérique latine*, 38, julio de 2000, pp. 77-97.

⁹ Félix Jiménez, "Stabilisation et ajustement économique au Pérou. Les limites du modèle néolibéral", en *Problèmes d'Amérique latine*, 38, julio de 2000, p. 61, y Oscar Dancourt, "Reforma neo-liberal y política macroeconómica en el Perú", en *Revista de la CEPAL*, Santiago, abril de 1999, pp. 28-30.

son destituidas; el Poder Judicial es brutalmente depurado, así como la Corte Suprema.

El autogolpe es justificado por "la ineficacia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial", que se oponen a la estrategia de paz "del pueblo y el gobierno". Fujimori recibe un apoyo masivo de la opinión (más del 80%). El Ejército apoyó el golpe, destinado a darle libertad de acción en sus operaciones antilibertarias. Fujimori y los militares están ligados por un pacto de ayuda mutua. El presidente protege al Estado Mayor contra las numerosas acusaciones de violación de los derechos humanos, mientras que en la "guerra sucia" en curso las atrocidades se multiplican de ambas partes y un tercio del territorio nacional está bajo administración militar.¹⁰

La lealtad del Ejército para con el presidente toma también caminos menos confesables. Pasa por la mediación de un extraño y diabólico personaje, ex capitán del Ejército, ex abogado penal, espía multifacético y Rasputín andino, Vladimiro Montesinos, alma condenada de Fujimori, experto en golpes torcidos y corruptor sin límites, simple -pero omnipotente- consejero del Servicio Nacional de Informaciones (SIN).

En Perú, 1992 parece ser el año de todos los peligros cuando ocurre una "divina sorpresa". El 12 de septiembre, Abimael Guzmán, el "presidente Gonzalo", jefe supremo de Sendero Luminoso, es detenido por la policía. Es expuesto, rugiente, en una jaula con traje de presidiario, y luego condenado rápidamente a prisión perpetua. Detrás de los barrotes, un año más tarde, propone al jefe de Estado la apertura de negociaciones con miras a un acuerdo de paz. Se inicia el retroceso de la amenaza "senderista".

¹⁰ Contra los ataques de Sendero Luminoso, los militares organizaron milicias de autodefensa (las rondas campesinas). Sobre Sendero Luminoso y la "pacificación", véase Henri Favre, "Sendero luminoso, horizontes oscuros", en *Qué Hacer*, Lima, octubre de 1984, núm. 31, pp. 25-35, y John Crabtree, *Alan García en el poder, 1985-1990*, Lima, Peisa, 2005, cap. VI, p. 279.

Los éxitos de la lucha contra las guerrillas –cuyos órganos dirigentes están ahora desmantelados– y el restablecimiento financiero desacreditan un poco más a los partidos tradicionales, que se habían mostrado impotentes frente a esos dos flagelos. La popularidad presidencial está en el cénit cuando el golpe suscita la reprobación internacional. Por eso Fujimori convoca a una Asamblea Constituyente y promulga una nueva ley fundamental, que es aprobada el 31 de octubre de 1992 por referendo. La nueva Constitución (monocameral y centralizadora) limita los poderes de los partidos y favorece la consulta directa de los electores. Autoriza la reelección presidencial (art. 112).

En abril de 1995 Fujimori es triunfalmente reelegido por el 64,4% de los sufragios contra el 22,8% de Javier Pérez de Cuéllar, el ex secretario general de las Naciones Unidas. Por cierto, el poder controla todas las instituciones electorales y pudo movilizar con toda tranquilidad los recursos estatales, mientras que los oponentes, políticos, periodistas o dirigentes sindicales, eran objeto de medidas de intimidación diversas y selectivas. Pero esto no explica todo. Por otra parte, ni los éxitos en materia de economía y seguridad ni el clima de enfrentamiento, hasta de aniquilación del adversario, creado por el gobierno, pueden dar cuenta de la homogeneidad de los resultados a través del territorio y los diferentes sectores sociales. De hecho, Fujimori sedujo a los dos extremos de la pirámide social.¹¹

Las reformas económicas ultraliberales y antiestatales, después del laxismo estatizador del gobierno “aprista”, hicieron del “ingeniero” un héroe para el empresariado, una suerte de Pinochet peruano. Paralelamente, para corregir las consecuencias del ajuste drástico, los programas sociales del presidente se dirigen a las regiones más pobres y a los medios más desheredados. Fujimori en persona mani-

¹¹ Véase Carlos Iván Degregori, *La década de la antipolítica*, op. cit., p. 53.

fiesta su interés por los trabajadores informales y los habitantes de los pueblos jóvenes (zonas de viviendas precarias), que ahora se sienten reconocidos. Los servicios de base y las infraestructuras destinadas a ellos son presentados como otros tantos beneficios otorgados por el mismo jefe de Estado. Esos “favores” politizados soslayan las asociaciones independientes e ignoran a las autoridades locales. El clientelismo presidencial perturba las relaciones horizontales. La ideología del hermético chino, antipolítica y antiestatal, es también hostil a los actores colectivos e institucionales.

Se asiste así, en un marco formalmente democrático, a una suerte de privatización del poder público. Ciertas manipulaciones presupuestarias permiten liberar fondos gracias a los cuales el Ejecutivo comprará el silencio o la complicidad de los funcionarios o de los políticos. Nadie parece en condiciones de resistir el “tsunami Fujimori”.

Sin embargo, este sistema entra en crisis apenas el presidente, cuya aura de vencedor del terrorismo y de la inflación se ha apagado un poco, decide ser candidato para un tercer mandato. Según su “interpretación auténtica” de la Constitución de 1993, Fujimori no habría efectuado más que un solo mandato y por lo tanto podría pretender un segundo. Tras haber destituido a los miembros del Tribunal constitucional, que se oponía a esta segunda reelección, Fujimori intenta pasar por la fuerza. Así es “reelegido” el 9 de abril de 2000. Pero una mayoría de peruanos estiman que el escrutinio fue fraudulento. Una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) denuncia las “graves irregularidades” de una elección que, por otra parte, viola la mayoría de las reglas elementales de libertad y transparencia. Mientras que la oposición, que considera que le robaron la victoria, prosigue sus manifestaciones, la presión internacional sigue siendo fuerte. Es entonces cuando se hacen públicas unas grabaciones de video comprometedoras. Muestran a Montesinos entregando dinero a un diputado para

que se una al grupo gubernamental, minoritario en el Congreso... El descubrimiento de cuentas bien alimentadas en ciertos bancos suizos (a nombre del mismo Montesinos) pronto vienen a completar el cuadro. Las revelaciones se multiplican. Fujimori decide entonces disolver el servicio de informaciones. Montesinos abandona Perú. Es inculpado de corrupción de funcionario y blanqueo de dinero. Más tarde se sabrá que protegía a narcotraficantes y no desdeñaba el tráfico de armas. El 20 de noviembre de 2000, el presidente Fujimori, en viaje oficial en Asia, se refugia en Japón, de donde envía su dimisión por correo. Al día siguiente es destituido por el Parlamento por "incapacidad moral".

Este extraño episodio peruano, pues, empezó como la "success story" edificante de un modesto profesor que quería moralizar la democracia y terminó en una noche de Walpurgis de la corrupción y el autoritarismo. Habrá durado diez años.

✕ Esta década de "autoritarismo competitivo"¹² y de "furor anti-institucional" fue, en Perú, el equivalente funcional de las dictaduras antisubversivas de los años setenta, cuando la lucha contrarrevolucionaria había abierto el camino a las reformas que promovían el mercado y la desaparición del Estado, en otras partes del continente.¹³ Fujimori, elegido en 1990 con el apoyo de los electores y de los partidos de izquierda contra el candidato del "tratamiento de choque neoliberal", pretendía "inventar un país"; sobre todo, habrá revelado la fatal sencillez de los patinazos autoritarios. No obstante, el caso peruano es francamente singular: en el paisaje movedizo de América La-

¹² Sobre este concepto aplicado a Fujimori, véase Romeo Grompone, *La escisión inevitable. Partidos y movimientos en el Perú actual*, Lima, IEP, 2005, pp. 54-57. En líneas más generales, véase Steven Levitsky y Lucan Way, "Elections Without Democracy. The Rise of Competitive Authoritarianism", en *Journal of Democracy*, abril de 2002, pp. 35-45.

¹³ Sobre el balance del fujimorismo, véase en particular Julio Coder, *El fujimorismo. Ascenso y caída de un régimen autoritario*, Lima, IEP, 2001.

tina de fines del siglo xx, la antipolítica se inclina más bien hacia el cambio social o la revolución.

ANTIPOLÍTICA Y REFUNDACIÓN PLEBISCITARIA

En efecto, los líderes antisistema parecen tener viento en popa en América Latina en el recodo del siglo. Pero se ubican políticamente en las antípodas de la experiencia peruana. Por el contrario, son las secuelas negativas de las políticas de ajuste inspiradas en el "consenso de Washington" las que los llevan al poder. Más allá de sus diferencias, estos dirigentes políticos tienen en común la impugnación del conjunto de los partidos que gobernaron hasta entonces su país, así como el modelo económico que aplicaron.

En Venezuela, la llegada al poder del teniente coronel Hugo Chávez en 1998 debe mucho a la singularidad monoexportadora del país. La opulenta república petrolera, tras haber sido la tierra de elección de las dictaduras andinas, se había convertido durante cuarenta años, a partir de 1958 y de la firma del Pacto de Punto Fijo entre los principales partidos, en una democracia ejemplar. En los años setenta, Venezuela es incluso uno de los raros países del continente que no sucumbió al autoritarismo. El país conoce hasta comienzos de los años ochenta un crecimiento económico sostenido (6% como promedio anual), cuando el "contragolpe" petrolero viene a poner en entredicho todo el sistema. Frente a la caída de los precios de los hidrocarburos, el Estado se ve en dificultades para saldar su deuda externa. La austeridad está a la orden del día. La desocupación y la inflación aumentan en paralelo. "La ilusión de armonía",¹⁴

¹⁴ Que sería uno de los rasgos identitarios de Venezuela, según Moses Naím y Ramón Piñango (dirs.), *El caso de Venezuela. Una ilusión de armonía*, Caracas, IESA, 1984, sobre todo el cap. 22, del que son autores.

según Moses Naím y Ramón Piñango, se disipa. Los partidos de gobierno se crispan sobre sus clientelas de clases medias y de trabajadores sindicalizados. La corrupción en las avenidas del poder adquiere una visibilidad chocante,¹⁵ mientras que las políticas de rigor inéditas, inspiradas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), agravan la pobreza.

El 27 de febrero de 1989, manifestaciones populares contra el alza de los carburantes y los transportes públicos se convierten en un motín. Es el Caracazo, duramente reprimido por el Ejército y que concluye con un número elevado de muertos, sin duda varios centenares.¹⁶ El Caracazo es una línea que divide las aguas en la historia contemporánea de Venezuela. Desacredita en forma duradera, si no definitiva, al partido socialdemócrata (Acción Democrática) cuyo candidato, elegido sobre la base de un programa nacionalista y social, se pasó al rigor. Terminará destituido y encarcelado, acusado de desvío de fondos. Estos motines marcaron de manera irreversible a los jóvenes oficiales con sensibilidad social, aunque no hayan participado de un modo directo en el restablecimiento del orden público,¹⁷ cosa que ocurrió con Hugo Chávez, que desde el retorno de la coyuntura petrolera ya conspiraba contra los partidos de Punto Fijo, la oligarquía, el FMI...

¹⁵ Sobre la relación entre corrupción, descontento y redistribución regresiva de los ingresos, véase Edgardo Lander, "Venezuela: l'impact de l'ajustement néolibéral (1989-1993)", en *Problèmes d'Amérique latine*, 12, enero-marzo de 1994, pp. 46-50.

¹⁶ Sobre el Caracazo, sus orígenes y sus consecuencias, véanse sobre todo Miriam Kornblith, *Venezuela en los noventa. La crisis de la democracia*, Caracas, IESA, 1998, y Margarita López Maya, "El repertorio de la protesta popular venezolana entre 1989 y 1993", en *Cuadernos del CENDES*, Caracas, 17/93, enero-abril de 1997, pp. 109-130.

¹⁷ En Venezuela, la mayoría de las tentativas de golpes de Estado militares en los años sesenta son de orientación castrista. Sobre Chávez antes de su llegada al poder, véase Cristina Marciano y Alberto Barrera Tyszka, *Hugo Chávez sin uniforme. Una historia personal*, Caracas, Debate, 2006.

Por lo tanto, son esos jóvenes oficiales los que, el 4 de febrero de 1992, se sublevan contra el gobierno, en Caracas y en el interior del país. No tienen ningún programa. La indignación hace las veces de él. Pero las indiscreciones hacen fracasar el golpe. La jerarquía militar solicita entonces a Hugo Chávez –que se halla bajo arresto– que anuncie en la televisión el fracaso de la rebelión. Ahora bien, lejos de hablar como vencido, Chávez, en su "mensaje bolivariano", lo declara circunstancial, y expresa: "Desgraciadamente, por ahora, los objetivos que nos habíamos fijado no han podido ser alcanzados". Ese "por ahora", que se convertirá en uno de los leitmotiv de la táctica política de Chávez, transforma su derrota en victoria: se impone ipso facto como el jefe de los militares rebeldes.

Una nueva tentativa de golpe, ésta mucho más violenta y en la que Chávez, entre rejas, no participa, tiene lugar el 27 de noviembre de 1992, sin mayor éxito. Ella testimonia la amplitud del malestar militar. Pero el pueblo no acompaña. Los golpistas son ciertamente populares, y sin embargo permanecen aislados: la cultura política nacional, después de 35 años de democracia representativa, privilegia la vía electoral, cosa que no se les va a escapar ni a Hugo Chávez ni a sus compañeros desde su salida de prisión, en 1994. Mientras tanto, los partidos políticos zozobran en la impopularidad. Ocurre que no pudieron o no supieron garantizar a la vez una democracia efectiva y el progreso social, es decir, la participación de todos en el maná generado por la renta petrolera, considerada en Venezuela como un crédito natural. En este Estado rentista, donde la cuestión de la producción es secundaria, es evidente que todos los ciudadanos deben beneficiarse con los recursos del subsuelo, don del cielo. Por eso, en este "país-ventanilla de cobro", cualquier programa de austeridad que acarree la contracción del empleo y de los beneficios sociales no puede ser sentido sino como un escándalo intolerable. Equivale a

un suicidio del régimen cuando el ascenso de la pobreza es acompañado por desigualdades ostentosas.

El rechazo de los partidos políticos tradicionales es tanto más profundo cuanto que los partidarios del giro económico liberal se ponen de acuerdo en exaltar a los gerentes y a los jefes de empresa, mientras que “demonizan la política y los políticos, hombres del pasado”,¹⁸ como dice Teodoro Petkoff. Una situación soñada para un *outsider* que se propone limpiar las caballerizas de Augias. Es en este contexto que, en la elección presidencial, Chávez presenta su candidatura de héroe de oposición y de víctima del sistema. El ex golpista, que no dejó de acrecentar su poder, forma un “polo nacionalista” que va a tener que enfrentar primero a una muy graciosa ex Miss Universo, reina de los sondeos y alcalde de un distrito elegante de Caracas. Luego, frente al irresistible ascenso del oficial paracaidista, los partidos de gobierno van a oponerle, en vano, una candidatura más enérgica.

No obstante, el 6 de diciembre de 1998 Chávez es elegido por más del 56% de los sufragios. Hizo campaña contra el “régimen de los partidos”, en favor de una “nueva república”, de una ciudadanía igualitaria y de la defensa del Estado social. Las clases medias sufridas e indignadas le dieron ampliamente sus sufragios.¹⁹ La victoria de la “antipolítica” es la de ellos. Algunos grandes grupos de prensa nacionales y de bancos locales también apoyaron a Chávez, sin embargo candidato de la izquierda. Es cierto que su campaña, esencialmente moralizadora, no anunciaba en

¹⁸ Teodoro Petkoff, *Dos izquierdas*, Caracas, Alfadil, 2005, p. 108; véase también Miguel Ángel Contrera Matera, “Cultura política y política cultural en Venezuela. Un debate sobre las reconfiguraciones de la ciudadanía y la democracia”, en José María Cárdenas *et al.*, *Debate sobre la democracia en América Latina*, Caracas, Universidad Central de Venezuela-CEA, 2006, p. 53.

¹⁹ Véase Nicolas Kozloff, *Hugo Chávez. Oil Politics and the Challenge to the US*, Nueva York, Palgrave y MacMillan, 2006, p. 46.

modo alguno la instauración del socialismo. Por otra parte, el recién elegido dice estar cerca de la “tercera vía” de Tony Blair y de su representante en América del Sur, el presidente brasileño F. H. Cardoso. ¿Oculta su juego el ex golpista, como cuarenta años antes el “reformista” Fidel Castro?

Sea como fuere, una vez elegido presidente, Chávez pone inmediatamente en marcha su programa de refundación política. Y apenas tres meses después de su entrada en Miraflores, convoca una Asamblea Constituyente en la cual sus partidarios son mayoritarios. Ésta promulga, a partir de 1999, una nueva Constitución. La V República venezolana ha nacido. Fundada en “la doctrina de Simón Bolívar” (art. 1), establece un “Estado democrático y social de derecho”, “federal y descentralizado”. A lo largo de sus 350 artículos, garantiza el derecho de propiedad, el pluralismo político y la iniciativa privada (art. 192). Prohíbe los monopolios y reserva la explotación de los recursos naturales al Estado (art. 113). Por otra parte, corresponde al Estado “planificar, racionalizar y regular la economía”. Esta Constitución socialdemócrata, que otorga numerosos derechos a los ciudadanos (en materia de salud y educación en particular), autoriza la reelección presidencial por un solo mandato, y éste es llevado de cinco a seis años. El Congreso se vuelve monocameral, y el control popular es garantizado por una batería de procedimientos refrendarios de iniciativas múltiples. Pero el cambio más llamativo es semántico. Venezuela se convierte en una “república bolivariana”. Los departamentos ministeriales son en adelante los “ministerios del poder popular”.

La democracia directa, en efecto, está inscrita en la Constitución. El nuevo régimen no rehabilita los partidos políticos. El oficial Movimiento Quinta República (MVR) no es más que una máquina electoral que depende estrechamente del Estado, y hasta directamente de la presidencia. Fuera del MVR, la coalición mayoritaria abarca a pequeñas formaciones de izquierda con audiencia reducida. La decisión, en 2007, de fu-

sonar esos partidos con el MVR en un Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) preocupó a la opinión independiente sin entusiasmar a los asociados de la operación, e incluso algunos impugnaron la perspectiva del partido único de la mayoría. De hecho, el régimen siempre parece vacilar entre una lógica de "partido dominante" y una "democracia participativa" que no se limitaría a la práctica refrendaria.

La "participación popular" ("Todo el poder al pueblo") tiene sin embargo el favor presidencial. En un primer momento, adopta la forma de los "círculos bolivarianos", donde algunos creyeron ver la imitación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) castristas. Esos círculos, de hecho, agrupan en una base territorial a los partidarios del presidente, de quien dependen de manera directa. Mientras que existen 70 mil a fines de 2001, la experiencia de este partido *bis* es abandonada algunos años más tarde en favor de los "consejos comunales", una red de poder local dotada de competencias institucionales junto a y por encima de los alcaldes electos. ¿Se trata de dinamizar así la democracia representativa o, se preguntan en Venezuela, de dinamizarla deslegitimándola? De hecho, a Hugo Chávez no le gustan mucho los partidos, sus coerciones burocráticas, las ambiciones rivales que allí se manifiestan. Porque "Chávez es el pueblo" y pretende mantener una relación bien directa con éste.

Para ello tiene muchas bazas personales. Directo, familiar y cercano a la gente, "el hombre de la sonrisa entre los dientes" sabe comunicar y seducir. Orador compulsivo y colorido, está además dotado de una locuacidad histriónica inagotable. Político de su época, domina el arte televisivo y gobierna *coram populo* en la pantalla chica. La emisión televisada *¡Alo presidente!* es un sorprendente espectáculo de campaña electoral permanente que asocia un Consejo de Ministros, una plática de predicador y un discurso de oposición. En efecto, allí se ve al jefe de Estado y de gobierno asumir también una función tribunicia.

A menudo se ha preguntado si Chávez era demócrata. Vana pregunta. Es ante todo un militar que desconfía de los civiles. Le gusta mandar, más que gobernar. Sus grandes admiraciones se dirigen a los autócratas militares de "izquierda", como el general peruano Velasco Alvarado, o el panameño Omar Torrijos.²⁰ Durante un tiempo tuvo entre sus consejeros a un ideólogo peronista teórico de la "revolución nacional" y de la "unión de las Fuerzas Armadas y las masas" a los fines de "superar el orden neocolonial".²¹ Su semántica refleja un abordaje marcial de la vida política, hecha de órdenes, de patrullas, de batallas y de victorias. En los momentos difíciles, el ex teniente coronel confía los puestos importantes y expuestos a oficiales, cualesquiera que sean sus competencias técnicas.

La militarización del poder y la "chavización" de las Fuerzas Armadas, es cierto, son las consecuencias directas del golpe fallido del 11 de abril de 2002. Salvado por la lealtad de una parte del Ejército, Chávez volvió a hacerse cargo de éste y emprendió una vasta depuración de sus cuadros. Luego de dominar el Ejército, a partir de 2004 va a movilizar y entrenar importantes contingentes de reservas con vistas a defender el país contra una eventual "agresión estadounidense". La oposición teme entonces que esas reservas reclutadas entre los partidarios del gobierno se conviertan en "milicias bolivarianas", precisamente cuando el poder casi no desalienta a los grupos de choque que actúan en su nombre en los momentos de tensión.

²⁰ Sobre los regímenes militares "de izquierda", numerosos en América Latina entre 1968 y 1972, véase Alain Rouquié, "Révolutions militaires et indépendance national en Amérique latine, 1968-1971", en *Revue française de science politique*, xxi, 5 y 6, octubre y diciembre de 1971. Véase también Alain Rouquié, *L'État militaire en Amérique latine*, París, Seuil, 1982, cap. 10 [trad. esp.: *El Estado militar en América Latina*, Buenos Aires, Emecé, 1984].

²¹ Se trata de Norberto Ceresole. Véase su ensayo "El peronismo y las fuerzas armadas en la crisis del estado de derecho liberal", en Miguel Gazera y Norberto Ceresole, *Peronismo. Autocrítica y perspectiva*, Buenos Aires, Descartes, 1970, p. 212.

En forma paralela, se debe subrayar la multiplicación de las consultas electorales. El régimen organizó catorce años en diez. El mismo Hugo Chávez fue elegido tres veces presidente, y cinco consultas lo legitimaron. Presidente desde 1998, se hizo reelegir en 2000 en el marco de la nueva Constitución, y luego una vez más en 2006. En 2004 ganó el referendo revocatorio que le impuso la oposición, y luego, en 2009, un nuevo referendo sobre la reelección ilimitada del presidente. La democracia plebiscitaria se alimentó con la pasión del voto, un signo distintivo de Venezuela desde hace medio siglo.

En 2002 la oposición, enfrentada con sus derrotas a repetición, acusa al Consejo Nacional Electoral de parcialidad y denuncia (pero sin aportar pruebas) una trampa sistemática de las elecciones. Una parte de ésta decide entonces salir del marco constitucional y adoptar una estrategia golpista.

El 11 de abril de ese año, la bipolarización alcanza un punto de ruptura. Los dos campos se miden en la calle. La tensión está llena de choques. Luego de una manifestación antigubernamental violentamente atacada por partidarios de Chávez, algunos militares se niegan a reprimir, se sublevan y arrestan al presidente. El jefe de la confederación patronal (Fedecámaras) ocupa la presidencia. Se apura por disolver el Congreso, destituir a los alcaldes y gobernadores electos, y suspender la Constitución. La mayor parte de los medios apoyan el golpe de Estado e ignoran la fuerte movilización de los partidarios de Chávez, a quien pronto liberan militares leales, y que es restablecido en sus funciones el 13 de abril.

Después de este fracaso resonante, el empresariado venezolano lanza una huelga general para echar a Chávez del poder en noviembre del mismo año; más tarde, en diciembre, son los cuadros y los sindicatos de la empresa de petróleo PDVSA los que a su vez van a la huelga. La prueba de fuerza durará 63 días, hasta comienzos de febrero de 2003.

Como el petróleo representa el 80% de las exportaciones y la mitad de los ingresos del Estado, esta operación, calificada de sabotaje por el gobierno, estuvo a punto de ser fatal para las autoridades en funciones. En efecto, mientras que la producción superaba los 3 millones de barriles por día en 1997, apenas excede los 200 mil a comienzos de 2003... El PBI baja el 28%²² el primer trimestre.

Pero si el país está de rodillas, Chávez aguanta de pie. La oposición lo ha subestimado. Los huelguistas son vencidos. Decenas de miles de empleados de PDVSA, entre ellos algunos de los más calificados, son despedidos. La oposición, luego del fracaso de las pruebas de fuerza y de las tácticas facciosas, y después de un referendo revocatorio que creía ganado de antemano, se llama a cuarteles de invierno y se niega a participar en las elecciones legislativas, facilitando así la tarea de Chávez: la asamblea monocolor, en efecto, va a delegarle, por una ley temporaria, el derecho a legislar por decreto. La estrategia desestabilizadora se volvió contra la oposición y reforzó el régimen y los poderes del presidente.

Sin embargo, con la instauración de la delegación legislativa, los oponentes tienen algo de razón en hablar alto y claro de dictadura. El "omnipresidente" controla todos los engranajes del Estado. La justicia ordinaria, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado y hasta el *ombudsman*²³ están entre sus manos. La Corte Suprema y el consejo electoral son mayoritariamente chavistas. La separación de los poderes ya casi no es respetada. El presidente decide todo, soslaya los mecanismos institucionales, sabe legitimar, en nombre del pueblo y de los más desfavorecidos, medidas discrecionales.

²² En virtud de la escasez de carburantes durante la huelga, Venezuela solicitó la ayuda de Brasil, que le entregó en forma urgente productos petrolíferos refinados. Véase Nicolas Kozloff, *Hugo Chávez, op. cit.*, p. 29.

²³ Es decir, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo.

Así, mientras que la Constitución bolivariana hace de Venezuela un Estado federal y descentralizado, el gobierno no vacila en denunciar la “descentralización” que pretende “desmembrar [la república] en 24 Estados secesionistas y medio millar de comunas anárquicas”.²⁴ Hasta asume la tarea de “reunificar el país”, vale decir, centralizar el poder. El gobierno bolivariano parece improvisar en función de las vicisitudes de la vida política y de sus intereses del momento, sin dejarse detener ni por los imperativos constitucionales ni por sus propios compromisos.

Por otra parte, Chávez acepta cada vez menos la oposición y las críticas. En particular las de la prensa. Ni siquiera está lejos de considerar que los medios deben estar al servicio de la revolución bolivariana, cuando las radios y las televisoras privadas fueron la punta de lanza de la oposición en su estrategia de desestabilización. En las avenidas del poder se estima (y se lo dice) que “en el 80%, el éxito de una política” depende de la comunicación.²⁵ Chávez hace uso y abuso de ella también cuando impone al conjunto de las cadenas de televisión la retransmisión de sus (numerosos) discursos, según una tradición latinoamericana utilizada habitualmente con mayor parsimonia.²⁶ No obstante, la prensa escrita sigue siendo pluralista, con dos periódicos de oposición y un gran grupo de prensa independiente (que sin embargo dejó de ser antichavista). La principal cadena de televisión, Radio Caracas Televisión (RCTV), que había apoyado el golpe de mayo de 2002 e ignorado la movilización popular en favor de Chávez, pierde su licencia de emisión en mayo de 2007: sus instalaciones son transferidas a una cadena del Estado. Esta decisión presidencial, tomada bajo un pretexto

²⁴ Según *Correo breve*, 2008, núm. 2, publicación del Ministerio del Poder Público para la Comunicación y la Información, titulado: *9 años, 9 erres*.

²⁵ Según el mismo *Correo breve*, 2008, núm. 1, *Política es comunicación*.

²⁶ Entre 1999 y 2006 se asistió a 1.339 requerimientos de cadenas, según *El Nacional*, Caracas, citado por *Le Monde*, 28 de mayo de 2007.

insustancial, tuvo una gran repercusión nacional e internacional.²⁷ Esta actitud no fue popular. En las capas sociales que apoyan al régimen, en efecto, se apreciaban las telenovelas tórridas de esta cadena privada, cuyos programas humorísticos, por otra parte, hacían las delicias de las familias...

Chávez y su gobierno, a su vez, se consideran víctimas del “terrorismo mediático”²⁸ que, de creerles, apunta a desestabilizar a todos los países que “construyen nuevos modelos económicos”. Por eso, sin duda, se promulgó una ley de “responsabilidad social” de la radio y la televisión (la famosa “ley mordaza” según los oponentes), que amenaza en forma permanente las opiniones disidentes y alienta la autocensura. Por eso es significativo que Caracas, en abril de 2008, haya acogido la reunión de los empresarios de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), bastión panamericano de los valores liberales y de la defensa de la economía de mercado. Por supuesto, una contrarreunión internacional acompañó los trabajos de la SIP con el objeto de protestar contra el “bloqueo mediático” que los “intereses imperialistas y la oligarquía” imponen a Venezuela.²⁹ Pero este episodio es propio de un régimen que sabe cuán lejos puede llegar sin riesgos.

Podría decirse que otro tanto ocurre con las elecciones. El pluralismo no es cuestionado. Los escrutinios no presentan irregularidades aptas para privarlos de legitimidad. Pero la equidad faltó a la cita: la desproporción de los medios en-

²⁷ Esta mancha a la libertad de expresión fue sobre todo condenada por el Senado estadounidense y por el Parlamento europeo. Obsérvese que RCTV ha vuelto a emitir pero en cable.

²⁸ Véase Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, *Cronología de la guerra de cuarta generación de Estados Unidos contra Venezuela*, marzo de 2008, p. 14.

²⁹ Léase la posición oficial frente a la SIP en el artículo de Fernando Buen Abad, “Frente comunicacional contra la manipulación mediática”, publicado por el semanario cultural gubernamental *Todos Adentro*, 9 de febrero de 2008. Para una crítica de esta versión, véase el editorial “Terrorismo mediático”, en *El Nacional*, 4 de abril de 2008.

tre los candidatos oficiales y los otros es aplastante. La propaganda gubernamental ocupa todo el espacio público. Las radios y las televisoras estatales ignoran casi por completo a los partidos de la oposición. No obstante, a fines de 2007, Chávez anunció que necesitaba seguir aumentando aún más sus poderes con el objeto de instaurar el “socialismo del siglo XXI”. Para ello, propuso una reforma de la Constitución de 1999 que recaía sobre 69 de sus 350 artículos.

Esta reforma preveía sobre todo la reelección indefinida del presidente y una centralización del poder en nombre de la democracia participativa. Los “consejos comunales” estarían inscritos en la Constitución. El presidente podría también modificar por simple decreto el estatuto y los límites de los Estados federados y de las comunas, y crear nuevas unidades territoriales. La referencia al socialismo como objetivo por alcanzar es explícita, pero la propiedad privada no se cuestiona.

La reforma constitucional es sometida a un referendo. El gobierno moviliza todos los medios del aparato estatal al servicio del “sí”. Los militantes chavistas peinan los barrios. El referendo se transforma en plebiscito. El mismo Chávez pone todo su peso en la balanza, multiplicando los argumentos patrióticos tales como: “Votar ‘no’ es votar por Bush”. Pero el 2 de diciembre no será su Austerlitz. El “no” prevalece. Un año antes, sin embargo, 7,3 millones de electores lo habían reelegido con el 63% de los votos. Solamente 4,4 millones de electores votaron por el “sí”. “Ego” Chávez no convenció con su proyecto de reforma a medida. Los alcaldes y los gobernadores chavistas, no reelegibles y amenazados por los nuevos poderes paralelos, hicieron las cosas de mala gana y, en algunos casos, hicieron votar “no” bajo cuerda...³⁰

La oposición echa entonces las campanas al vuelo y cree cercano el fin del régimen aborrecido. Pero Chávez opina lo

³⁰ “Venezuela. Are They Beginning to Lose the Faith”, en *The Economist*, Londres, 1° de diciembre de 2008.

contrario: reconoce el veredicto de las urnas y saluda la victoria de la democracia. Contrariamente a la imagen que quieren dar de él la oposición y la prensa internacional, pretende mostrar que no es un dictador. Pero como después del 4F (el 4 de febrero de 1992, fecha del golpe fallido en la jerga política nacional), el táctico Chávez declara: “Por ahora no pudimos” y evoca “las largas batallas venideras”.³¹ Se comprende que tiene toda la intención de hacer aprobar pronto su proyecto. Y de hecho, un nuevo referendo sobre la reelección ilimitada del jefe de Estado, pero también, esta vez, de todos los representantes electos, es organizado el 15 de febrero de 2009. Y el “sí” recoge el 54,4% de los sufragios. No sin trabajo ni trampa al espíritu de las instituciones, se abrió el camino para una tercera presidencia.

Chávez parece inclinado a las improvisaciones azarosas, hasta irreflexivas, pero de hecho anticipa perfectamente las reacciones de la opinión pública. Como buen militar, es tan atrevido en la ofensiva como prudente en la retirada. Este líder plebiscitario es un pragmático que adelanta sus peones en función de los plazos electorales en los que se fortalece su legitimidad. Un ejemplo: en junio de 2008, en nombre de la lucha contra el “Imperio” y las amenazas de complot invocadas por el régimen, un decreto ley presidencial sobre la reestructuración de los servicios de informaciones desata una amplia e inmediata protesta pública general. En efecto, esta ley ponía a los magistrados al servicio de las agencias de contraespionaje y obligaba a todos los ciudadanos a convertirse en sus informantes, oficializando así la delación. Frente a las críticas de las Iglesias, las ONG y los medios, que denunciaban el establecimiento de un “Estado policial”, el presidente reconoce el peligro potencial y da marcha atrás. Sin duda alguna, la perspectiva de las

³¹ *El Nacional*, 3 de diciembre de 2007.

elecciones regionales de noviembre de 2008 desempeñó un papel importante en su decisión.³²

Extraño régimen y singular presidente, que parece ceder a su temperamento autoritario pero avanza sobre el filo de la navaja, cuidándose de no franquear jamás la línea roja. Venezuela sigue siendo un Estado democrático sin “desaparecidos” ni represión masiva. La vida de los opositores (y de los periodistas) está menos en peligro allí que en algunos Estados vecinos. Pero el estilo del poder es el de la confrontación y la intimidación. “La amenaza Hugo” deja prever lo peor para aquellos que lo critican o simplemente no lo siguen sin reservas: universidades autónomas, empresas privadas, prensa independiente, ex aliados. Y nunca se sabe si se propone o no llevar a cabo sus amenazas. Debido a eso, muchos son los que piensan que hay que juzgarlo por lo que hace y no por lo que dice. Pero al mantener la tensión, al incitar a la polarización (ayudado en esto por los opositores), Chávez también busca movilizar a sus partidarios en forma permanente. La radicalización es el motor del sistema. ¿Puede ser largo tiempo sostenida sin pasar al acto?

La deriva mayoritaria es la lógica de este régimen. Durante mucho tiempo la oposición se sintió paralizada por su incapacidad de mejorar el 40% de los sufragios expresados. Chávez, que goza del favor de alrededor del 60% del electorado (reducido al 54% en febrero de 2009), gobierna para ellos e ignora a la minoría de la opinión que no le da su confianza: las clases medias, las profesiones liberales, las PYMES, pero también los empleados y los obreros sindicalizados son tratados como adversarios y hasta como enemigos. El régimen los combate hasta en su propia competencia profesional. Así, Venezuela apeló a miles de profesionales de la salud cubanos precisamente cuando los médicos ve-

³² “Chávez Shift Course after Uproar”, en *International Herald Tribune*, 11 de junio de 2008.

nezolanos emigran y el sector hospitalario está abandonado. Claro que los sindicatos de oposición son mayoritarios en las profesiones médicas.

En consecuencia, se asiste en Venezuela a un cambio político continuo sin ruptura de la normalidad constitucional. El régimen, que pretende ser fundamentalmente constituyente, se da por objetivo refundar la república. Ahora bien, en verdad hay que comprobar que hoy comparte este objetivo, en contextos ciertamente muy diferentes, con Bolivia y Ecuador. Sin embargo, las afinidades (o los parentescos) entre estos tres regímenes no dependen ni de la clonación ni de la petro-diplomacia venezolana, sino de dinámicas paralelas y absolutamente distintas.

SUFRAGIO UNIVERSAL Y ALTERNANCIA SOCIAL

En diciembre de 2005, la elección de Evo Morales a la presidencia en Bolivia constituyó un acontecimiento de alcance histórico. La amplitud de la victoria, tanto como el perfil sociológico del candidato vencedor, en efecto, perturbaron el paisaje político nacional. Con el 54% de los sufragios expresados contra el 29% de su adversario principal, Evo Morales es el presidente que hizo la mejor elección desde la restauración de la democracia en 1982. Pero sobre todo, por primera vez, un indígena aimara –culturalmente mestizado, por cierto, pero no integrado a las clases dirigentes– entró al Palacio Quemado, sede de la presidencia. Y no llegó solo. Con él, nuevas capas sociales accedieron a las responsabilidades públicas y modificaron en profundidad la composición étnica de las elites dirigentes. Sin duda, se trata del cambio más importante que conoció el país desde la revolución de 1952,³³ que

³³ Según Jorge Lazarte, “Bolivia en tiempo de Evo”, en *Nexos*, México, marzo de 2007, p. 47.

instauró el sufragio universal, nacionalizó las minas y efectuó una vasta reforma agraria.

Claro que la elección a la presidencia del dirigente de los sindicatos de cocaleros del Chapare no fue más que una sorpresa a medias. En las elecciones precedentes, en 2002, Evo Morales había quedado segundo, ayudado en esto por la injerencia del embajador de Estados Unidos, “jefe de campaña” involuntario, que había amenazado públicamente a Bolivia con la ira de Washington en el caso de que ese “narcotraficante” fuera elegido. Pero la victoria de 2005 ocurrió en un contexto de protesta social de gran amplitud y de cuestionamiento radical del sistema político.

Desde 2000, en efecto, los conflictos sociales se multiplicaron. Estos movilizan a vastos sectores populares opuestos a las reformas económicas liberales. Se asiste así a verdaderos levantamientos de usuarios contra las privatizaciones de los servicios públicos y la intrusión de la lógica del mercado en el acceso a los bienes de primera necesidad. Una “guerra del agua” sacudió a Cochabamba entre 1999 y 2000. La “mercantilización” del agua también sublevó a El Alto, el tumultuoso suburbio pobre que domina a La Paz. La movilización se amplía y se politiza luego en el país alrededor de la defensa de las riquezas del subsuelo, y en particular del gas. La capital es bloqueada. Las fuerzas del orden intervienen brutalmente, produciendo más de sesenta muertos. El presidente Sánchez de Lozada es entonces forzado a dimitir el 17 de octubre de 2003. El 6 de junio de 2005, el presidente Carlos Mesa Gisbert conoce la misma suerte, y los manifestantes radicalizados exigen la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. El conflicto torna ingobernable al país. Las “multitudes” parecen haberse convertido en un actor social determinante en Bolivia.³⁴

³⁴ El sociólogo Álvaro García Linera, que se convertirá en el vicepresidente de Evo Morales, forja entonces el concepto de multitud como nuevo

En una Bolivia reconocida como “multicultural y multiétnica” por la Constitución de 1994, las rebeliones sectoriales y la fractura étnica se confirman y desembocan en un levantamiento en masa nacionalista contra la apertura económica, las privatizaciones y las sociedades extranjeras. El rechazo de las reformas liberales se extiende a los partidos políticos que “traicionaron”. En efecto, es el partido de la revolución de 1952, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) el que, después de un viraje a la derecha a comienzos de los años ochenta, puso en marcha uno de los programas más amplios de liberalización económica de América Latina. La opinión popular lo acusa de “liquidar las riquezas naturales” de un país que, según las palabras de Alcide d’Orbigny en el siglo XIX, es “un mendigo [sentado] sobre un montón de oro”. Tras la desaparición de la plata y el estaño, la “angustia patrimonial” se concentró en el gas. Este “síndrome de Potosí” obsesiona la memoria colectiva de un país que ocupa el segundo rango continental por las reservas gasíferas. Es el “catalizador del descontento popular”.³⁵

Estos desbordes sociales debilitan a partidos que en apariencia son intercambiables en el marco de una democracia pactada parlamentarizada. Los acuerdos entre formaciones políticas destinadas a consolidar la democracia representativa más bien la desacreditaron. Entonces se pone de manifiesto una visión maniquea en la opinión: los partidos, el sistema establecido, la clase política testimoniarían

actor social, que reemplazaría a los sindicatos obreros. Véase su ensayo *Sindicato, multitud y comunidad. Movimientos sociales y formas de autonomía en Bolivia*, La Paz, 2001 [trad. fr.: *Pour une politique de l'égalité. Communauté et autonomie dans la Bolivie contemporaine*, París, Les Prairies Ordinaires, 2006]. Este tema es retomado en la obra colectiva dirigida por Álvaro García Linera, *Sociología de los movimientos sociales y acción colectiva*, La Paz, Diakonia Oxfam, 2004.

³⁵ Laetitia Perrier Bruslé, “Le Gaz bolivien. La Bolivie face à son avenir”, en “La Découverte des Amériques”, *Outre terre. Revue française de géopolitique*, 18, 2008, p. 235.

el egoísmo de los grupos dirigentes; por el contrario, el movimiento social, las protestas multitudinarias están adornados de todas las virtudes: patriotismo, participación, igualdad. Es en este clima fuertemente teñido de ideología que nace el Movimiento al Socialismo (MAS), que no es ni una formación anticapitalista, como su nombre parecería indicarlo,³⁶ ni un auténtico partido, sino el “instrumento político” del que decidió dotarse todo un conjunto de organizaciones sindicales contestatarias, en cuya primera fila están los coccaleros. En todo caso, el MAS es una federación muy flexible de asociaciones corporativas débilmente estructuradas. Sus miembros adhieren a ella a través de su organización, y la democracia directa se privilegia más que la representativa. Las decisiones se toman por consenso, luego de debates celebrados en asamblea general, en virtud de procedimientos totalmente sindicales.

Evo Morales, mediante su victoria, permitió que el movimiento social que desbordaba y desestabilizaba las instituciones encontrara una traducción electoral. El MAS tenía así como objetivo prioritario la refundación de la república por el sufragio con el objeto de acabar con el “modelo neoliberal” y la reintegración de los indígenas que la “herencia colonial” había excluido del poder y de la economía. Es mayoritario en la Cámara de Diputados, pero la oposición, que domina el Senado, resiste con mayor determinación a la política nacionalista y reparadora de Evo Morales en la medida en que dispone de una base territorial. En efecto, Bolivia es un Estado geográficamente heterogéneo y desarticulado. Las altas tierras andinas del oeste formaban el corazón

³⁶ Con vistas a las elecciones municipales, Evo Morales había retomado la “personalidad jurídica” (y el nombre) de un pequeño partido de izquierda que no tenía herederos, pero sin adoptar no obstante su programa. Véase Hervé di Alto, Pablo Stefanoni, *Nous serons des millions, Evo Morales et la gauche au pouvoir en Bolivie*, París, Raisons d’agir, 2008. Véase también Martín Sivak, *Jefazo. Retrato íntimo de Evo Morales*, Buenos Aires, Debate, 2008.

de la Bolivia útil en la época de la prosperidad minera. Ahora bien, en la actualidad, la riqueza se encuentra concentrada en las llanuras tropicales del este, y sobre todo en los departamentos de Tarija y Santa Cruz, dotados de reservas de hidrocarburos y productores de gas.

Santa Cruz, la capital económica del país, se encuentra a la cabeza de un departamento que representa el 30% del PBI nacional (contra el 3% en 1950). La región conoció un *boom* agrícola espectacular entre 1970 y 2000. No había sido afectada por la reforma agraria de 1952; por lo tanto, allí se constituyeron enormes dominios, claro que no siempre por medios legales. Como consecuencia de ello, este El Dorado atrajo a numerosos inmigrantes de Brasil y de Europa sobre todo, que conforman una muy activa burguesía blanca. El desarrollo de la agroindustria también suscitó una transferencia continua de población proveniente de las regiones andinas. Santa Cruz ofrece así una cara casi neocolonial, y allí el equilibrio social es muy frágil.³⁷ Las elites de las tierras bajas orientales, que en general apoyaron a los regímenes militares y en la actualidad al partido que surgió de allí,³⁸ no esperan de la democracia más que una autonomía departamental acrecentada. Los dirigentes locales, por su parte, evidentemente se sublevaron contra las manifestaciones masivas soberanistas del altiplano en favor de la nacionalización de los hidrocarburos.

En diciembre de 2005 los “prefectos” (gobernadores o presidentes de región) de los departamentos son por primera vez elegidos en el marco de un programa de descentralización, reclamado sobre todo por las fuerzas vivas del

³⁷ Véase Zeline Lacombe, “Identité et politique à Santa Cruz, Bolivie”, en “La Découverte des Amériques”, *Outre terre. Revue française de géopolitique*, 18, 2008, pp. 278-281.

³⁸ El Poder Democrático y Social (PODEMOS), dirigido por Jorge Quiroga, sucesor y heredero del general Bánzer, dictador (1971-1978) y luego presidente electo.

este del país.³⁹ El 2 de julio de 2006 tienen lugar en forma simultánea la elección de una Asamblea Constituyente y un referendo sobre la autonomía de los departamentos. Esta última consulta fue decidida para poner fin a la agitación autonomista cada vez más radical de los departamentos de la media luna oriental. El MAS hizo campaña por el “no” contra los dirigentes económicos y asociativos surgidos de los departamentos del este, que no quieren una nueva distribución de los ingresos fiscales, en particular aquellos que generan los hidrocarburos, y sobre todo se oponen violentamente a todo proyecto de reforma agraria. De acuerdo con un reflejo muy conocido bajo otros cielos, consideran que deben ser los principales beneficiarios de las riquezas naturales que ellos poseen.

Sin embargo, ni el gobierno ni el MAS son hostiles a las autonomías, muy por el contrario. Pero sí son favorables a una descentralización generalizada, que no sólo beneficiaría a los departamentos,⁴⁰ sino también a las provincias, a las comunas, a las “comunidades de los pueblos originarios” y de las “naciones autóctonas”. Esto se puede comprobar al leer el proyecto de Constitución. Sea como fuere, el escrutinio del 2 de julio da una respuesta clara y tajante a este respecto: el 57,7% de los bolivianos dijeron “no” a la autonomía de las regiones. La Constitución en vigor, la de 1994, instituyó una república unitaria. Ahora bien, los resultados del referendo se imponen a todos. Tiene fuerza de ley en el ámbito nacional.

Pero Bolivia está cortada en dos. Santa Cruz, Pando, Tarija, Beni votaron “sí” por mayorías aplastantes. Más del 70% para Beni y Santa Cruz. ¿Se puede ignorar la elección de semejantes minorías? Los autonomistas argumentan. La

³⁹ Surgidas de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.

⁴⁰ Los “departamentos” bolivianos son equivalentes a las “provincias” argentinas y a los “estados” mexicanos.

oposición esgrime la bandera de la democracia contra el poder central. Las opulentas llanuras tropicales se rebelan para obtener la autodeterminación contra el “Tíbet boliviano” del altiplano. Los departamentos del este están resueltos a imponer un Estado federal en el cual los departamentos decidirían acerca de los otros escalones de la descentralización sin interferencia del gobierno nacional. Pero el texto de la futura Constitución no prevé la modificación de la naturaleza unitaria del Estado.

Por otra parte, el MAS obtuvo la mayoría absoluta en la Asamblea Constituyente, mientras que su principal rival, el Poder Democrático y Social (PODEMOS), perdía la mitad de sus sufragios presidenciales (el 15% en vez del 29%). Sin embargo, no alcanza la mayoría de los dos tercios, indispensable para la aprobación del texto constitucional. Contra el bloqueo sistemático de la oposición, el gobierno vuelve por tanto unilateralmente a la regla mayoritaria y decide pasar por la fuerza. El proyecto de ley fundamental es así votado de prisa y corriendo en noviembre de 2006 tan sólo por los constituyentes progubernamentales en una asamblea sitiada por los partidarios de Evo Morales. Y el voto bajo la presión de los manifestantes aparece como una de las características de un régimen que aparentemente quiere articular la democracia representativa y la “democracia de la calle”. ¿Lógica etnocultural o estrategia política?

La deriva mayoritaria parece inscrita en la concepción comunitaria de la democracia, que es la de Evo Morales. Para él, en efecto, “la cuestión de las minorías es uno de los problemas mayores”,

porque a menudo las minorías no pueden aceptar lo que quiere la mayoría. Estas reglas no existen en la tradición indígena. Ellas fueron inventadas por el Occidente. En nuestra cultura –añade–, la decisión se obtiene por consenso. Cuando

uno empieza a interesarse en los pequeños grupos, el consenso es destruido.⁴¹

La oposición denuncia entonces el autoritarismo del nuevo poder y apunta con el dedo la instauración de una “dictadura chavista”. Los dos campos se radicalizan, movilizan a sus partidarios, salen a la calle y se enfrentan. Después comienza el duelo de los referendos. Los departamentos de la “media luna” oriental organizan consultas que aprueban masivamente la autonomía regional. El “sí” obtiene el 85,6% en Santa Cruz el 4 de mayo de 2008. Estos referendos, en los que la abstención es elevada, son considerados ilegales por el gobierno. Para aliviar la tensión, el presidente decide entonces poner en juego su mandato. Convoca a un referendo revocatorio, figura constitucional inédita en Bolivia, al que somete también a todos los prefectos elegidos de los departamentos. El escrutinio tiene lugar el 10 de agosto. La participación es fuerte, pero nada está zanjado. Morales es sin embargo plebiscitado por el 67% de los votos, mientras que los prefectos autonomistas también son ampliamente confirmados. Bolivia está más dividida que antes del referendo. Cada uno endurece sus posiciones.

Los dirigentes autonomistas llaman a la desobediencia civil contra la “dictadura del altiplano” y la Constitución “ilegal”. Decenas de edificios públicos son saqueados por comandos. En Tarija sabotean un gasoducto. Algunos grupos practican la caza humana contra los collas (los inmigrantes procedentes del altiplano), mientras que los campesinos manifiestan su apoyo al gobierno en los departamentos donde la disidencia es mayoritaria. En el departamento amazónico de Pando, las fuerzas de seguridad de la prefectura tiran sobre los simpatizantes del MAS, produciendo varias decenas de víctimas. El “septiembre negro” boliviano inquieta

⁴¹ Evo Morales, entrevista en BBC-Metro, 2 de octubre de 2007.

a los países vecinos, que ofrecen su apoyo al presidente electo. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la muy nueva Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) proponen su mediación.

Pero mientras se multiplican las violencias, las negociaciones continúan. Hasta logran ponerse de acuerdo en los diferentes escalones de la futura descentralización. La reforma agraria no debería cuestionar las propiedades productivas existentes. Por último, el delicado problema de la reelección presidencial, sobre el cual tropezaba *in fine* la discusión, es resuelto. El 25 de enero de 2009 tendrá lugar un referendo para aprobar la Constitución. Elecciones presidenciales anticipadas se desarrollarán en diciembre de 2009. Si Morales es reelegido, no podrá volver a presentarse al finalizar su mandato en 2014. Un mes de negociaciones y tres días de sesión parlamentaria desembocan en un acuerdo hecho de concesiones de ambas partes, un acuerdo que ya no se esperaba. La “democracia de la calle”, sin embargo, no cedió ante la representación nacional: miles de partidarios del gobierno, tras haber efectuado una marcha de 200 kilómetros, con el presidente a la cabeza durante un tramo, llegan a la plaza Murillo, sede de los poderes, en el mismo momento en que se produce el acuerdo constitucional, el 20 de octubre de 2008.

Bolivia a menudo estuvo al borde del abismo, sin caer nunca en él. Ahora se encuentra bajo el fuego cruzado de dos legitimidades que se excluyen, y que oponen los más numerosos a aquellos que se consideran los más “aptos”, por ser más modernos o más productivos, según el esquema que ya evocamos. El problema étnico agrava las escisiones y los rechazos recíprocos. El poder democráticamente elegido tiende a ceder a la tentación mayoritaria. Por su parte, las elites de la media luna, que siempre simpatizaron con las ideologías antiigualitarias, se indignan al ver a “pobres” gobernando a los “ricos”, a indios ocupando el poder hasta ahora en manos

de los blancos. Y el “nuestro turno” esgrimido por algunos movimientos indígenas no es para tranquilizarlos.

EL CAMBIO EN NOMBRE DEL ORDEN

El 26 de noviembre de 2006, Rafael Correa, un economista sin partido y casi desconocido, es elegido presidente de Ecuador con el 57% de los sufragios.

Este país agrícola y petrolero, que adoptó el dólar estadounidense como divisa en 2000, presenta la más fuerte inestabilidad política de América del Sur. De 1996 a 2006, en efecto, se suceden siete presidentes. Tres de ellos fueron derrocados por la conjunción de manifestaciones callejeras, intrigas politiqueras e insubordinación militar. Uno, Abdalá Bucaram, fue incluso destituido por “incapacidad mental”. No obstante, la elección de 2006 fue muy disputada. Rafael Correa, que para la circunstancia había improvisado una formación antipartidos (Alianza País), tuvo que enfrentar a un magnate bananero distribuidor de dádivas y comprador de sufragios, al que venció en segunda vuelta.

Rafael Correa es un profesor de economía de origen modesto, diplomado de la universidad de Illinois, que estudió también en Bélgica. Se presenta como un cristiano de izquierda. Por otra parte, había recibido el apoyo de las formaciones progresistas y de las asociaciones indígenas, como la poderosa y muy independiente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Al llevar a cabo una campaña antiparlamentaria contra el “régimen de los partidos”, hasta corrió el riesgo de no presentar candidatos a las elecciones legislativas. Es cierto que la confianza de los ecuatorianos en su Parlamento es la más baja de América Latina...⁴²

⁴² Alcanzaba el 13,3% entre 1996 y 2004 (contra el 20% en Bolivia, el 36% en Chile, el 38% en Uruguay). No era más que el 8,8% en 2004, según

En el curso de la campaña, Rafael Correa llamó por tanto a refundar la república, dándole una nueva Constitución. Su discurso fue oído por una opinión cansada por el caos político en el cual las retractaciones de los notables sólo igualan a la volatilidad del movimiento social, y en particular de las organizaciones indígenas.

El Ecuador del siglo XXI, marcado por la profunda crisis financiera de fines de los años noventa y por el tratamiento de choque ultraliberal que la siguió, experimenta un peligroso vacío político. La deslegitimación de los partidos políticos no preserva a los actores sociales. El movimiento indígena mismo perdió su dinamismo y parece desorientado. Más de 2 millones de ecuatorianos (sobre 13) emigraron. Se estima que las transferencias de divisas alimentan a más de un cuarto de la población.

El nuevo presidente, ignorando el Congreso, pronto hace aprobar por referendo la convocatoria a una Constituyente. La jugada es arriesgada, pero gana con el 82% de “sí”. Ecuador, pues, va a elaborar su vigésima Constitución. La precedente no tenía más que diez años. En la Asamblea Constituyente electa, la mayoría gubernamental dispone de 110 bancas sobre 130. Ésta se otorga plenos poderes legislativos y suspende el Parlamento, evitando así, mediante una infracción a la legalidad, la doble legitimidad parlamentaria. Los opositores, por supuesto, denuncian esta violación de la Constitución en vigor y sostienen la inutilidad de una nueva ley fundamental. Los historiadores, no sin inquietud, observan que todos los caudillos ecuatorianos, de García Moreno a Velasco Ibarra, se dotaron de una Constitución a medida⁴³ para instaurar un poder autoritario, gobernar sin

Latinobarómetro (1996-2004) y World Economic Forum (2005), en *The Politics of Policy. Economic and Social Progress in Latin America, 2006 Report*, Banco Interamericano de Desarrollo, 2005, p. 44.

⁴³ Véase Osvaldo Hurtado Larrea, “Él no salvará el Ecuador del caos general”, en *El Comercio*, Quito, 1º de abril de 2007.

partido y contra los partidos. Para los opositores, Correa es realmente el "Chávez ecuatoriano" anunciado y tan temido.

El estilo de gobierno y el comportamiento a menudo impulsivo del presidente Correa no parecen contradecirlos por completo, salvo en un punto: la supuesta semejanza con el comandante venezolano, del que no tiene la labia popular. Así como tampoco el gusto por el diálogo del ex sindicalista Evo Morales. Correa es más bien un intelectual decidido, elegante y frío. A menudo cortante, barre las objeciones, no soporta bien la crítica. Pero tanto la depresión económica de 1999 como la impotencia de los partidos en el recodo del siglo fortalecieron a este hombre solo que sabe utilizar la amenaza y evocar el pasado reciente para estrechar las filas de sus partidarios.

Correa no se propuso únicamente sacar al país de la "larga noche del neoliberalismo", al que nunca deja de vituperar. Él considera que la crisis de las instituciones proviene de la debilidad del Ejecutivo frente al Parlamento y, por lo tanto, a las maniobras de los partidos, cosa de la que parece dar fe, en efecto, la caída de sus tres predecesores. El nuevo presidente pudo observar en esas ocasiones cómo una manifestación en Quito de algunos miles de militantes había prevalecido sobre la elección soberana de la mayoría de los electores. En consecuencia, está decidido a darle a Ecuador una democracia fuerte, legitimada por la consulta directa a los ciudadanos y la práctica refrendaria. En efecto, él supone que los intereses sectoriales dominan el país: los intereses de los banqueros, varias veces sacados de apuro por el Estado durante la crisis financiera, los de las compañías fruterías o de las organizaciones étnicas.⁴⁴ El partido indígena Pachakutik y la CONAIE apoyaron el proyecto refundador, pero ese apoyo nunca es incondicional, como el presidente Lucio Gutiérrez, derrocado en abril de 2005,

⁴⁴ "Ecuador's New President", en *The Economist*, 20 de enero de 2007.

pudo darse cuenta a sus expensas. Además, el país está estructuralmente dividido, si no es dual. No se ve el porvenir de Ecuador con una misma mirada sobre la Costa y en la Sierra; en Guayaquil, metrópoli económica, y en Quito, sede de los poderes.

El proyecto constitucional fue aprobado por referendo por una mayoría cercana a los dos tercios el 28 de septiembre de 2008, luego de que los medios audiovisuales, en conjunto hostiles al gobierno, fueron metidos severamente en cintura.⁴⁵ La nueva Constitución autoriza la reelección (por un solo mandato) del presidente (art. 144), al que concede el derecho a disolver la Asamblea Nacional "en caso de obstrucción o de grave crisis política". Crea el referendo de iniciativa popular y consultas revocatorias para los mandatos locales y legislativos (art. 115). Por otra parte, los candidatos con funciones electivas ya no son obligatoriamente presentados por partidos, y éstos pierden el acceso al "registro electoral" si, en el curso de dos elecciones consecutivas, no alcanzan el piso del 5% de los sufragios expresados. Para comienzos de 2009 se prevén elecciones generales en el marco de la nueva Constitución. Éstas tienen lugar el 26 de abril. Rafael Correa, candidato, es reelegido en primera vuelta con cerca del 52% de sufragios expresados y veinte puntos por delante de su principal rival, el ex jefe de Estado Lucio Gutiérrez. También dispone de la mayoría en la Asamblea.

Sin duda alguna, no es fácil comparar estos tres regímenes antipolíticos y refundadores, cuya permanencia, en el momento en que escribimos, es tan disímil. Por otra parte, presentan entre ellos profundas diferencias que proceden tanto de las realidades nacionales como de la ecuación personal de su líder. Pero su parentesco es innegable y nada debe a la imi-

⁴⁵ Tras haber cerrado una cadena de televisión, el gobierno procedió a una revisión general de las frecuencias de todas las radios.

tación del más antiguo de ellos ni a la diplomacia activa de éste. Responden en verdad a un modelo común, que no carece de precedentes. En el campo estrictamente político, éste se caracteriza por la personalización del poder, una relación directa y sin mediaciones con el pueblo. En efecto, estos regímenes apelan al plebiscito contra los cuerpos intermediarios, y el presidente dispone de un poder "metainstitucional", dado que se ubica por encima de las instituciones. Democrático por naturaleza, es "absoluto" en su práctica, es decir, liberado de las reglas en la medida en que el "pueblo" así lo desea. Los tres casos evocados también tienen en común el mismo origen paradójico. Se impusieron ante la opinión como la única solución para salvar la coexistencia social y restablecer la gobernabilidad. Chávez y sus compañeros, como el conjunto de los ciudadanos de Venezuela en los años noventa, están marcados por la explosión del Caracazo. Evo Morales logró canalizar democráticamente la ola de movimientos sociales de protesta. Correa quiere restituir a su país la estabilidad política y la continuidad del Estado. Pero las razones políticas del cambio no pueden ser aisladas de los objetivos sociales y económicos que estos gobiernos persiguen.

BOLÍVAR Y EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

Hugo Chávez, entonces joven oficial politizado, admiraba sin reservas a los militares nacionalistas en el poder en América Latina o en otras partes en el Tercer Mundo. Pero cuando conspira con algunos compañeros de armas a comienzos de los años ochenta, se pone bajo la égida del Libertador Bolívar. La célula conspirativa, que va a organizar las dos tentativas de golpe de 1992, adopta el nombre de Movimiento Bolivariano Revolucionario. ¿Por qué esta invocación trivial a Venezuela? ¿Qué contenido encubre esta referencia histórica? ¿Tautología o nostalgia romántica?

El Libertador, nacido en Caracas, fue el primer presidente de la Gran Colombia independiente anterior a la separación de Venezuela. Es el héroe supremo del panteón nacional y el símbolo del país. La moneda venezolana, muy maltratada, lleva su nombre. Todo lo que es grande, bello, único en Venezuela –pico, plaza, edificio–, también. Porque este fundador epónimo es el vector del nacionalismo. Los dictadores inmutables de los siglos XIX y XX, como Guzmán Blanco (1870-1888) y Juan Vicente Gómez (1908-1935), solicitaron en gran medida su aura y multiplicaron las celebraciones a su memoria. Sus admiradores hasta utilizaron algunos de sus escritos para legitimar las autocracias.⁴⁶ Pero fue el régimen semidemocrático de López Contreras (1935-1941), sucesor de Gómez, el que verdaderamente hace del culto a Bolívar una religión de Estado, con la introducción de una liturgia a la que la escuela y el Ejército estuvieron estrechamente asociadas. Este culto laico, inculcado desde la más tierna infancia, impregna las mentalidades, y por eso pudo servir a las causas más diversas. El "culto de un pueblo", expresión de admiración, se transformó en un "culto para el pueblo", estima el historiador Carrera Damas.⁴⁷

Pero ¿qué significa realmente Bolívar para Chávez? Por supuesto, es la aspiración a la unidad continental y a la integración sudamericana lo que persigue cuando evoca como objetivo mayor "terminar la obra de Bolívar". La creación, contra el proyecto panamericano de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), de una "alternativa", convertida finalmente en "Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América" (ALBA), es su manifestación más evidente. Sin duda alguna, la tentación de la "presidencia vitalicia" –que

⁴⁶ Véanse sobre todo los escritos del positivista Vallenilla Lanz y su *Cesarismo democrático. Estudio sobre las bases sociológicas de la Constitución efectiva de Venezuela* (1919).

⁴⁷ Germán Carrera Damas, *El culto a Bolívar. Esbozo para un estudio de las ideas en Venezuela*, Caracas, Universidad central de Venezuela, 1973, p. 290.

es, como se vio, el pivote del constitucionalismo bolivariano— tampoco es totalmente ajena al culto de Chávez por el Libertador. Sin embargo, no todo en Bolívar está en consonancia con las ambiciones del joven oficial mestizo de Barinas. Bolívar, ese aristócrata caraqueño, ¿no ponía en guardia a su país contra la irrupción de caudillos populares de sangre mezclada?

Pero el Bolívar de Chávez es ante todo el emancipador, el hombre de una descolonización que él pretende proseguir. Bolívar es también para él el héroe desdichado, fulminado, que intentó sacar a su país del laberinto de la traición, tal como aparece en la novela de García Márquez, que cita con mucho gusto.⁴⁸ Sin embargo, el omnipresente Bolívar⁴⁹ tuvo sin duda al comienzo otra función política, ésta mucho más sutil, porque se trata de una referencia revolucionaria que congrega, pero que está desprovista de doctrina o de ideología demasiado precisas. Es así como, durante la campaña electoral de 1998 y en una parte de su primer mandato, Chávez condenó la corrupción y se opuso a las “reformas neoliberales”, al tiempo que parecía ignorar los temas mayores y los mitos de la izquierda continental. De manera general, por otra parte, es de notar que él elige a sus ídolos, extraídos de la historia venezolana, de una forma a la vez crítica y personal —aunque sus héroes privados no sean los más consensuales ni los que están más en consonancia con el pensamiento bolivariano—. De este modo, reverencia a Ezequiel Zamora, dirigente de las guerras federales del siglo XIX, que condujo a sus tropas contra los blancos y los ricos. Rinde un culto casi familiar a Maisanta

⁴⁸ Gabriel García Márquez, *El general en su laberinto*, Bogotá, Oveja Negra, 1989.

⁴⁹ Se ha creado una verdadera mitología alrededor de Chávez y de su héroe epónimo, cuyos retratos tapizan la oficina presidencial. Se dice, por ejemplo, que el presidente siempre deja a su derecha una silla vacía para... el Libertador.

(Rafael Pérez Delgado), un bandido honorable, de quien sería descendiente.⁵⁰ Después, cuando Chávez se interna en la ruta del socialismo, invoca a... Jesús, “el primer socialista”. No menciona a Guevara sino en virtud de su muerte crística, pero Marx y Lenin lisa y llanamente están ausentes.

Por consiguiente, ¿qué es este socialismo del nuevo siglo? Sin lugar a dudas, un modelo de sociedad para inventar, sui géneris. El deber de “desarrollar el socialismo” estaba inscrito en los proyectos de reforma constitucional de 2007 y 2009, pero no el modo de uso. Y hay que rendirse a la evidencia: a pesar de los discursos más radicales del poder y de los gritos de alarma de la oposición, después de más de diez años de chavismo, Venezuela sigue siendo una economía de mercado y no un Estado colectivista. Costaría trabajo encontrarle alguna semejanza con la Cuba de los Castro o la Corea de los Kim. La austeridad socialista no está presente en un país donde un consumismo galopante siempre fue la prueba de la buena salud de la economía y la consecuencia de los elevados precios del petróleo.

Venezuela no colectivizó los medios de producción y de intercambio. Hugo Chávez ni siquiera propuso jamás un programa de nacionalizaciones sistemáticas de los sectores financieros e industriales, como el de la Unión de la Izquierda en Francia en 1981. Por cierto, el poder público volvió a tomar las riendas del petróleo y, en cierto modo, lo “renacionalizó”. Por otra parte, todas las sociedades extranjeras debieron renegociar sus contratos en un sentido muy favorable al Estado, pero no se procedió a ninguna expropiación. Principal coerción: en toda estructura de asociación con una empresa extranjera, PDVSA debe ser mayoritaria. Debido a eso, sólo las

⁵⁰ Véase Luis F. Báez y Rosa M. Elizalde, *Chávez nuestro*, La Habana, Casa Editora Abril, 2004, y Gustavo Coronel, “Chávez, une révolution géopolitique”, en “La Découverte des Amériques”, *Outre terre. Revue française de géopolitique*, 18, 2008, p. 157.

compañías estadounidenses que adherían a la estrategia anti-Chávez de Washington prefirieron retirarse. Las otras se contentaron con reducir sus pretensiones y su envergadura.

La compañía de petróleo, “sociedad anónima” administrada, antes de 1998, en virtud de criterios de rentabilidad, figuraba entre las empresas públicas petroleras de mayor rendimiento. Pero a los ojos de los partidarios de Chávez, PDVSA era un “Estado dentro del Estado”, más preocupado por una buena gestión que por alimentar el presupuesto nacional. A partir de 2003, la compañía pública se convierte en “un instrumento de lucha contra la pobreza”,⁵¹ destinado a financiar, en una perfecta opacidad, algunos programas sociales. Esto no impide que el sector petrolero, en Venezuela, siga siendo infinitamente más abierto que en México o en algunos países árabes.

Por lo demás, es cierto que el gobierno nacionalizó ciertas actividades consideradas estratégicas, como las telecomunicaciones (CANTV) o la electricidad (EDC), recomprando a un precio elevado los activos de las compañías. Además, al azar de los acontecimientos políticos o de las preocupaciones sociales, el presidente Chávez decidió estatizar las empresas que dependen de determinado sector particular, la leche, el cemento o la siderurgia. Estas decisiones son la mayoría de las veces imprevisibles, y anunciadas de manera espectacular en ocasión de una actuación presidencial televisada. Ellas dan lugar a indemnizaciones legales onerosas para el tesoro público.

La nacionalización de tres cementeras extranjeras (francesa, mexicana y suiza) ilustra de manera significativa el *modus operandi* adoptado. El anuncio público televisado, el 4 de abril de 2008, fue justificado por el retraso del país en ma-

⁵¹ Según Alí Rodríguez, miembro del partido Patria Para Todos (PPT), nombrado por Chávez a la cabeza de PDVSA después del 11 de abril, citado por Nicolas Kozloff, *Hugo Chávez, op. cit.*, p. 30.

teria de alojamiento social y de hábitat popular imputado a la política excesivamente exportadora de las industrias involucradas. En pocas palabras, este tipo de nacionalizaciones improvisadas y tan poco sistemáticas parece proceder no tanto de la voluntad de colectivizar la economía, o de controlarla más estrechamente, como de ponerla al servicio de la política social. Por otra parte, fue después del fracaso del referendo constitucional de diciembre de 2007 que el presidente se dedicó a probar con medidas de gran visibilidad que, según el eslogan gubernamental, “Venezuela pertenece a todos”. El socialismo del siglo XXI ¿dependería entonces del puro bricolaje electoralista? No del todo. La fórmula encubre a la vez el retorno del Estado y el “hecho del príncipe” [*fait du prince*] en el campo económico, o sea, una gestión politiquera y a corto plazo de la economía. Pero ésta no hizo más que agravar la desindustrialización “neoliberal” promovida por el régimen precedente, de la que da testimonio la composición muy poco diversificada del comercio exterior.⁵² Para no decir nada del pobre atractivo de semejante política para los inversores extranjeros.⁵³

La reforma agraria es tradicionalmente la marca de las verdaderas revoluciones en América Latina. Chávez no dejó de ofrecerle un sacrificio, dando así nuevas armas a sus opositores. De hecho, la realidad es bastante modesta, y más trivial. En un país monoprodutor, afligido por la maldición petrolera, la agricultura es una actividad marginal. Venezuela, que antaño fue un gran exportador de café y de cacao, hoy en día importa el 75% de los productos alimenticios que consume. Hace cuarenta años, las legumbres vendidas a Ca-

⁵² La parte del petróleo en las exportaciones pasó del 80% en 1998 al 92% en 2006.

⁵³ Según el Banco Central, las inversiones extranjeras directas se derrumbaron entre 1999 y 2007. Pasaron de 5 mil a 500 millones de dólares, mientras que en el mismo tiempo el crecimiento del PBI trepaba de del 0,3% al 10 por ciento.

racas provenían de California, y hoy son suministradas por los países vecinos. A raíz de esto, la “Ley de Tierras y Desarrollo Agrario” de 2001 no tenía nada en particular de revolucionario ni de colectivista: preveía la expropiación de los grandes dominios (de más de 5 mil hectáreas) no productivos. De hecho, fue menos radical que la de 1960, de la que numerosos propietarios de todos modos habían sacado partido para vender al Estado tierras poco rentables. Como quiera que sea, si la distribución de tierras a los “campesinos” tenía por finalidad restablecer “la soberanía alimentaria del país”, no parece que el objetivo esté en vías de ser alcanzado.

También puede observarse el socialismo sui generis de Chávez como el bosquejo de una política social generosa, que trataría de redistribuir la renta petrolera a los más desfavorecidos. En efecto, el régimen pretende estar al servicio de los pobres: la politización de lo social es incluso su característica primera. “Con Chávez contamos”: los sectores marginales, los excluidos del reparto del oro negro, poseerían a su vez un derecho de giro sobre los recursos naturales. Esta democratización es puesta en marcha por las misiones, esos proyectos sectoriales dirigidos que disponen de un presupuesto importante, a discreción sólo de la presidencia. Y de hecho, la “misión” salud (Barrio Adentro) o en favor de la erradicación del analfabetismo (Robinson), las tiendas públicas de primera necesidad (Mercal) mejoraron la suerte de los más pobres. Pero sobre todo dieron a sus beneficiarios la sensación de ser finalmente reconocidos en cuanto ciudadanos; en otras palabras, miembros con todas las ventajas y los derechos de la comunidad nacional. Y ciertamente no es casual que esas misiones se hayan desarrollado en 2002-2003, período de polarización aguda: procuraron al gobierno y a su jefe una fuerte base de adhesión popular.

Pero estas políticas poco ahorrativas en medios y con una racionalidad a menudo dudosa no hacen milagros. Por cierto, los pobres viven mejor, pero siguen siendo pobres. Las

“misiones” no pueden reemplazar un empleo estable y bien remunerado. Ahora bien, a pesar del fuerte crecimiento de la función pública y parapública,⁵⁴ la tasa de desocupación sigue siendo elevada en Venezuela (alrededor del 15% en 2007-2008), y, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 42,2% de la población activa pertenece al sector informal.⁵⁵ La pobreza aumentó fuertemente hasta 2003, luego habría retrocedido unos veinte puntos entre 2004 y 2006, cifra que deja escépticos a la mayoría de los analistas.⁵⁶ En cuanto a las desigualdades, también habrían aumentado entre 2000 y 2004, y la fuerte inflación de 2008-2009 (cercana al 30%) habría agravado esa tendencia que la caída de los precios petroleros, en el último trimestre 2008, no iba a revertir.

Por otra parte, como reconoce el propio presidente entonando el mea culpa sobre las espaldas de las cementeras, el alojamiento social no acompañó el movimiento. Las ciudades, y en primerísimo lugar la capital, siguen estando rodeadas de amontonamientos de construcciones insalubres, las infraestructuras están degradadas y los transportes urbanos son insuficientes. Más grave todavía es el ascenso de la delincuencia, que hace de Caracas la ciudad más violenta de América del Sur, superando incluso a Río de Janeiro en este siniestro concurso.⁵⁷ Semejante fenómeno habitualmente

⁵⁴ Este sector suministra hoy casi la mitad de los 6 millones de empleos formales.

⁵⁵ Véase “El empleo informal, un virus”, en *El Nacional*, Caracas, 2 de abril de 2008.

⁵⁶ La pobreza no involucraría más que al 33,9% de la población, contra el 53,9% veinte años antes, según los datos oficiales retomados y publicados por la Corporación Andina de Fomento; véase “La Révolution bolivarienne, état des lieux”, en *Le Monde*, 7 de julio de 2007. Para una discusión de las cifras, véase Marc Saint-Upéry; *Le Rêve de Bolívar. Le défi des gauches sud-américaines*, París, La Découverte, 2007, p. 108 [trad. esp.: *El sueño de Bolívar. El desafío de las izquierdas sudamericanas*, Barcelona, Paidós, 2008].

⁵⁷ La cantidad de homicidios se habría triplicado entre 1998 y 2004 en Caracas. Aumentó cerca del 37% entre 1999 y 2006 en el conjunto del país. Véase “Na mão do Bandido”, en *Veja*, San Pablo, 3 de mayo de 2006.

no es propio de los regímenes autoritarios. Y para conocer los resortes de esta violencia impune, uno se pregunta: ¿comprensión excesiva del gobierno para con los delincuentes, “víctimas de la sociedad capitalista”, o excesiva politización de la policía y de la justicia?

Decididamente, no es fácil situar políticamente a Hugo Chávez, ni verlo con claridad en sus orientaciones. Aquí encontramos un mosaico de lo más ecléctico, referencias múltiples y sin un nexo aparente. Pero su discurso afectivo y reivindicativo es radicalmente “anti”: el adversario es un enemigo para el comandante. La retórica, por lo tanto, es marcial. El ex golpista, a todas luces, tiene una ternura particular por la vía armada en política, justamente aquella donde él fracasó. Antes del golpe de Estado fallido de 1992, por lo demás, Chávez habría tenido contactos continuados con Douglas Bravo, el prestigioso jefe guerrillero venezolano.⁵⁸ Son conocidas las buenas relaciones que mantiene con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Hasta el terrorista Carlos, claro que su compatriota, condenado en Francia a reclusión perpetua, parece haber tenido derecho a su simpatía. Sin duda, su admiración ilimitada por el otro comandante, Fidel Castro, también tiene que ver con la dimensión militar del régimen cubano.

Para explotar este tropismo profesional, el presidente Chávez tenía necesidad de un gran enemigo. El cuadragésimo tercer presidente de Estados Unidos, el hombre de la “*war of choice*”, de la “*coalition of the willings*” y de la exportación de la democracia, fue un regalo caído del cielo. No obstante, sólo en 2004 los temas de la amenaza imperial y las invectivas contra el presidente estadounidense hacen su aparición, para volverse pronto una obsesión en el discurso de Chávez. Es cierto que los Estados Unidos de G. W. Bush nunca ocultaron su simpatía por la oposición venezolana, y

⁵⁸ Véase Luis F. Báez y Rosa M. Elizalde, *Chávez Nuestro*, *op. cit.*

sobre todo su apoyo al golpe de Estado del 11 de abril. En contradicción con su credo proclamado, se habían apurado en reconocer a las autoridades facciosas. Desde entonces, la tensión no dejó de crecer: los medios estadounidenses a menudo adoptan los acentos reaganianos, en la época de la Nicaragua sandinista, para hablar de Chávez. Pero éste, más táctico que impetuoso, esperaba su hora. Y sólo en 2004 entró en campaña, cuando, debido al estancamiento iraquí, Bush II alcanzó cimas de impopularidad internacional.

Chávez no se limita a los ataques verbales contra el gran Satán del Norte. En nombre de la seguridad nacional moviliza las reservas, se lanza en una política de compra de armamentos, se acerca a los Estados que no están en buenos términos con Washington, como la Rusia de Putin, e incluso a *rogue states* del “eje del mal”, como Irán. Tras haber multiplicado las provocaciones como consecuencia de expresiones belicosas procedentes de ciertos medios conservadores estadounidenses, Chávez prepara al país contra una agresión de Estados Unidos que considera cercana, hasta inminente. Eventualidad que la doctrina Bush tornaba posible, pero que resultaba totalmente improbable en virtud del doble conflicto en Irak y Afganistán, pero también de la historia continental.⁵⁹ El precedente cubano, sin lugar a dudas, desempeñó cierto papel en esta actitud de desafío a la “hiperpotencia”.

Sin embargo, el Goliat imperialista no se dignó a interesarse realmente en el David sudamericano que se desgañaba gritando al lobo. Porque la cruzada antiestadounidense de Venezuela, alimentada de la nostalgia de la Guerra Fría, tiene que ver a todas luces con cierta esquizofrenia. En efecto, Estados Unidos, primer cliente de Venezuela, absorbe

⁵⁹ En efecto, Estados Unidos nunca intervino militarmente en América del Sur, es decir, al sur de Panamá. Véase a este respecto nuestro artículo: “Amérique latine. La chasse gardée des États-Unis?”, en *L'Histoire*, julio de 2007.

más del 69% de sus exportaciones. Y el país suministra a los estadounidenses el 11% de sus importaciones de hidrocarburos (1,5 millones de barriles por día). Además, es su tercer proveedor de crudo y su sexto socio comercial. Chávez, llevado por la euforia de un ascenso interminable de los precios en 2007-2008, había llegado a esgrimir la amenaza de no vender más petróleo a los electores de Bush (al tiempo que decía estar dispuesto a darlo a los pobres de Harlem). Esto implicaba olvidar numerosas variables de envergadura. Primero, que no se cambia de clientes de la noche a la mañana cuando se produce un crudo pesado que requiere refinerías adaptadas. Segundo, que Venezuela depende tanto más del mercado estadounidense cuanto que la compañía CITGO, que dispone de 1400 estaciones de servicio y varias refinerías al norte del río Bravo, es una filial de PDVSA.

Con la elección de Barack Obama, Chávez se ve privado de enemigo. El antinorteamericanismo militante se vuelve más difícil de practicar. Por otra parte, el presidente venezolano, en su mensaje de felicitaciones al nuevo elegido, no estuvo lejos de ver en Obama a un "Chávez estadounidense". Es así como saludó "la elección histórica de un afroamericano" como una prolongación del "cambio de época iniciado al sur del continente".

Se volverá una página. Y con mayor utilidad para Chávez en la medida en que Venezuela es sin duda alguna el país de América del Sur, y tal vez de América Latina, más norteamericanizado. La gran mayoría de la opinión pública, por otra parte, es hostil al conflicto diplomático con Estados Unidos.⁶⁰

⁶⁰ El 76% de los venezolanos consideran malo para el país el conflicto con Estados Unidos, según una encuesta Hinterlaces publicada por *El Nacional*, 19 de septiembre de 2006, citada por Margarita López Maya y Luis Lander en "Venezuela: las elecciones presidenciales de 2006. ¿Hacia el socialismo del siglo XXI?", en Isidoro Cheresky *et al.*, *Elecciones presidenciales y giro político en América Latina*, Buenos Aires, Manantial, 2007, p. 244.

Pero entonces ¿quién encarnará la figura del enemigo? Cualesquiera que sean las contingencias, el discurso debe ser radical y la amenaza, permanente. El régimen, por otra parte, saca su fuerza de la acción social de una retórica extrema y de una práctica política relativamente moderada. ¿No es siempre posible poner en ejecución la amenaza? Después de 2006, la adopción de eslóganes paleorrevolucionarios tomados del castrismo cubano es a este respecto esclarecedor: "¡Socialismo o muerte!" Semejante exhortación sólo puede traer malos recuerdos a la izquierda latinoamericana que antaño había escogido la vía armada. Pero también tiene resonancias del miedo al porvenir de una parte de la opinión que apoyó en sus comienzos una "revolución" pacífica llevada a cabo en un marco constitucional (de la que realmente no salió).

La referencia castrista, sin embargo, se ha vuelto omnipresente, obsesiva. Sobre todo es inquietante cuando Chávez y sus colaboradores hacen un elogio desmesurado de la "democracia cubana", presentada como superior a la "democracia formal y burguesa", según una fórmula muy trasnochada. También se comprende mal que toda crítica fundada del régimen cubano, en materia de derechos humanos, de libertades o de prisioneros políticos, sea recibida como un ataque contra la "república bolivariana". La asimilación, lejos de ser halagüeña, es hasta francamente espantosa: el régimen castrista ¿sería el porvenir de la democracia en Venezuela? Por supuesto, una identificación tan caprichosa como aproximativa da argumentos a la oposición de todo tipo. ¿Para qué puede servir la referencia castrista a una no-revolución, sino para acreditar la idea de que en realidad se asiste a una cubanización inexorable del país, precisamente cuando a pesar de todo el Estado de derecho es más o menos respetado? ¿Chávez juega solamente a meter miedo?

Sin duda, detrás de ese mimetismo y ese aparente seguidismo, hay que percibir el gran proyecto diplomático

bolivariano. Chávez no abandonó a Bolívar por Castro. Se acercó a Castro para realizar el gran designio de Bolívar. Chávez, para ser mirado como el “guía” de la revolución continental, se presenta como heredero del líder máximo. La relación filial que mantiene con el comandante, ahora en cuidados paliativos, tiene que ver con la captación de herencia y su anticipo, al igual que los intercambios de cooperantes por petróleo. La “amenaza castrista”, en otros términos, la cubanización del país,⁶¹ es una figura retórica, un tropo radical que hace temblar a una mayoría de ciudadanos. El poder mantiene así una atmósfera conflictiva que moviliza a sus partidarios y fragiliza a la oposición, cuyos pasos en falso facciosos, como vimos, siempre contribuyeron a reforzar el régimen.

Pero la guerra civil fría no sólo tiene ventajas. La dinámica excluyente de ese régimen integrador también desemboca, a la larga, en la multiplicación de los oponentes. Cuantiosos son sus electores de ayer que se alejaron de un presidente “socialista” considerado imprevisible. Lo que un periodista de izquierda llamó la “estrategia de los autitos chocadores”⁶² provoca inútiles daños en el frente interno, así como en el exterior del país. La práctica de la amenaza como medio de gobierno no garantiza ni un funcionamiento sereno de las instituciones ni sobre todo el desarrollo (que no se puede confundir con el crecimiento mecánico del PBI).

Sin embargo, en el contexto de la historia nacional y más allá del estilo, Chávez parece adaptarse a cierto modelo de gobierno del petro-Estado venezolano en período de alta coyuntura. El Estado distribuye. “Sembrar el petróleo” sigue siendo un ideal permanente en período de euforia pe-

⁶¹ Si bien los cooperantes cubanos son bien recibidos en Venezuela, según la encuesta Hinterlaces ya citada, el 79% de los venezolanos son hostiles a la influencia cubana.

⁶² La fórmula es de Teodoro Petkoff, director del diario de oposición de izquierda *Tal Cual*.

trotera. Y ésta siempre es propicia a los avances nacionalistas y a las grandes ambiciones internacionales.

Pérez Jiménez, un auténtico dictador de los años cincuenta, ya se había lanzado en proyectos faraónicos de dudosa utilidad. Carlos Andrés Pérez, durante su primera presidencia (1974-1979), nacionalizó el petróleo y creó en las orillas del Caroni, en Guayana, un gran centro de industria pesada. Fue muy activo en el diálogo Norte-Sur al defender posiciones tercermundistas y un regionalismo continental del que nació el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).⁶³ Esta organización de cooperación regional estaba destinada, entre otras cosas, a conformar un frente común de cara a los países desarrollados.

Venezuela, democracia testigo desde 1958 en un continente presa de las dictaduras, también tiene una tradición de activismo continental y de injerencia política. En los años sesenta, Caracas aplicaba la famosa doctrina Betancourt de promoción de la democracia negándose a reconocer a los gobiernos no constitucionales (ya fueran de derecha o de izquierda). Así, el petróleo siempre fue un instrumento de política exterior al servicio de cierto “modelo” venezolano.

Según Moses Naím, Venezuela sigue siendo en verdad el país de las “grandes aspiraciones y las grandes frustraciones”;⁶⁴ de algún modo, el país de Bolívar.

Las grandes aspiraciones no siempre son populares. Las generosidades petroleras consentidas a Cuba o a ciertos Estados de América Central (Nicaragua, Honduras), las ayudas a los países del ALBA, no son muy apreciadas por los

⁶³ El SELA, fundado bajo el impulso de Carlos Andrés Pérez y de su homólogo mexicano Luis Echeverría, inicialmente tenía por objeto “contribuir a la autosuficiencia regional y al desarrollo”. En la actualidad, el SELA es un observatorio de las políticas económicas, una suerte de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) latinoamericano.

⁶⁴ Según Moses Naím y Ramón Piñango (dirs.), *El caso de Venezuela, op. cit.*, p. 11.

electores de Chávez. Para éstos, la renta petrolera debe servir para liquidar la deuda social y mejorar sus condiciones de vida. Algunos consideran incluso que, desde 2006, fueron olvidados en beneficio de los “amigos extranjeros”.⁶⁵ Lo hicieron saber en las urnas, en el referendo de diciembre de 2007, infligiendo a Chávez un serio revés; luego lo reiteraron en parte en las elecciones locales de noviembre de 2008. Y el “no”, en febrero de 2009, representaba el 46% de los sufragios expresados...

El régimen de Chávez está pendiente del precio del petróleo. Cuando hacía campaña contra las políticas de ajuste de sus predecesores en 1997-1998, el barril se negociaba a 8 dólares. En julio de 2008, alcanzó los 150 dólares. En diciembre del mismo año, la crisis financiera mundial llevó el barril a menos del tercio de su valor de julio. ¿Cuál es el precio mínimo por debajo del cual el régimen de Chávez deberá cambiar de política, renunciar a su diplomacia de las vacas gordas, reducir los gastos sociales? El destino de Chávez ¿es el de Carlos Andrés Pérez: ajuste y austeridad tras gastos ostentosos? ¿O bien, enfrentado a la erosión de los medios, el régimen va a conocer una crispación autoritaria y la fuga hacia adelante en el plebiscito permanente?

DE LAS REVOLUCIONES DEMOCRÁTICAS Y CULTURALES

Los gobiernos de Bolivia y Ecuador se consagraron desde 2006 a la tarea común de refundar la república. Estos regímenes se dicen revolucionarios. Evo Morales, sobre todo, no pierde ocasión de proclamar que él ha emprendido una “revolución democrática y cultural”. Rafael Correa, por su parte, anuncia una “revolución ciudadana, democrática, ética,

⁶⁵ Según la misma encuesta Hinterlaces ya citada, el 87% de los venezolanos no aprobarían la ayuda financiera aportada a otros países por Venezuela.

nacionalista”. Pero estos regímenes aliados de Venezuela, a pesar de un aire de familia, están dotados de una fuerte identidad. Y su mismo alineamiento con Caracas tiene límites. Así, cuando Venezuela dejó el Pacto Andino por el Mercosur, Bolivia garantizó la presidencia rotativa de la Comunidad Andina (CAN) en nombre de su interés nacional.⁶⁶ Del mismo modo, cuando en lo más álgido de los enfrentamientos con los autonomistas de la media luna, Chávez, solidario y bravucón, dijo estar dispuesto a intervenir militarmente en Bolivia en caso de golpe de Estado contra el presidente Morales, su oferta de intervención fue muy mal recibida por el gobierno. Claro que hasta ahora, la política del abrazo del oso nunca dio buenos resultados.

No obstante, ¿Ecuador y Bolivia están comprometidos en la vía del “socialismo del siglo XXI”, o incluso del socialismo a secas? La etiqueta del partido del presidente en Bolivia no debe engañar. El MAS es un nombre prestado. El vicepresidente, Álvaro García Linera, matemático y sociólogo, lector de Althusser y de Mariátegui, ciertamente evoca el socialismo como un “ideal a largo plazo”.⁶⁷ Pero el programa del MAS no es colectivista. Evo Morales ignora el marxismo, aunque la retórica anticapitalista tomada de la “vieja izquierda” a menudo frecuenta sus palabras cuando se trata de rechazar las “reformas neoliberales” recomendadas por el “consenso de Washington” y, sobre todo, la mercantilización de los servicios públicos. Su socialismo, en resumidas cuentas, parece limitarse a un proyecto de reforma agraria moderado, a una política de ingresos fiscales más favorable al Estado central y a programas sociales asistencialistas del tipo de aquellos favorecidos por el Banco Mundial y practi-

⁶⁶ En efecto, el 42% de las exportaciones no tradicionales de Bolivia son absorbidas por los países de la CAN.

⁶⁷ “Bolivian Vice-President Álvaro García Linera. The Post-neoliberal Age”, en *Newsweek*, 8 de junio de 2006.

cados por la mayoría de los países del continente (subsidio a los niños escolarizados, a la tercera edad, etcétera).

El modelo económico venidero, según el vicepresidente, sería un “capitalismo andino y amazónico”,⁶⁸ que resta definir, pero quizá no esté muy alejado del “socialismo del siglo XXI”. Mientras tanto Bolivia, con justa razón, se jacta de llevar a cabo una gestión macroeconómica equilibrada y prudente, de haber reducido la deuda pública y el déficit presupuestario. Los aumentos de salarios fueron moderados, mientras que, gracias al alza de los precios del gas, el crecimiento de 2006 a 2008 fue cercano al 5%. Pero de este balance equilibrado la mayoría de las veces casi no se retuvo otra cosa que la medida espectacular representada por la “nacionalización” de los hidrocarburos, el 1° de marzo de 2006.

Esta decisión, que surgía de la aplicación de los resultados de un referendo de 2004, venía como anillo al dedo para responder a la angustia patrimonial de los bolivianos, pero también para relanzar la popularidad del presidente en vísperas de la elección de la Constituyente. La dramatización del acontecimiento, que tuvo lugar en el centésimo día de la presidencia en un campo petrolero de la compañía brasileña Petrobras ocupado militarmente, no obedecía sólo a preocupaciones de política interior. También apuntaba a impresionar a Brasil, primer cliente, para obtener de él un aumento de las tarifas contractuales hasta entonces en vigor. Más allá de la gesticulación comercial, esta “nacionalización” no lo era realmente puesto que, lejos de imponer una expropiación, el decreto se contentaba con organizar la renegociación de todos los contratos, al tiempo que hacía de la compañía nacional (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos [YPFB]) el comprador único de la producción.

De hecho, el antinorteamericanismo que exhibe la Bolivia de Evo Morales nada debe a Venezuela ni a Cuba. Para

⁶⁸ “Bolivian Vice-President Álvaro García Linera...”, *op. cit.*

comprender la lógica de las amenazas estadounidenses de represalia en el caso de que el “narcotraficante” Morales ganara en 2002, o la expulsión del país en octubre de 2008 del embajador Goldberg y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), hay que remitirse al mismo hilo conductor: la cultura tradicional de la coca y la política unilateral de Estados Unidos. Evo Morales, presidente y ex sindicalista cocalero, para el mayor perjuicio de los estadounidenses, hizo inscribir en el texto de la nueva Constitución la despenalización de la “hoja sagrada”, “la coca original, ancestral, patrimonio cultural de los pueblos andinos”. Debido a eso, Washington “descertificó” a Bolivia por su insuficiente cooperación en la “guerra contra la droga”. Bolivia también viene de perder el beneficio de las preferencias comerciales que había acordado Estados Unidos a sus exportaciones no tradicionales, y que representaban varias decenas de miles de empleos.⁶⁹

La nueva Constitución, ratificada por referendo en enero de 2009, instituye, como la precedente, un Estado unitario multiétnico y pluricultural. Pero la república es en adelante también “social [...], comunitaria, descentralizada”. La ley fundamental garantiza el “pluralismo político”, pero también el “pluralismo económico, jurídico, cultural y lingüístico”, teniendo en cuenta así las 36 naciones indígenas constitutivas del país. Por otra parte, el sector comunitario ocupa en adelante su lugar al lado de los sectores públicos y privados de la economía.

Si existe una revolución boliviana, se manifiesta en esencia en el nivel sociológico. Consiste en el perfil de los nuevos dirigentes. Tanto, si no más, en sus orígenes de clase como en su pertenencia étnica, aunque a menudo los dos se confunden.

⁶⁹ Sobre todo en el sector textil. El gobierno esperaba que esta decisión del gobierno de Bush podría ser revocada por la nueva administración demócrata, cosa que no se produjo.

Acaso Morales sea realmente el primer presidente “indio” de las Américas, si se olvida al jurista zapoteca Benito Juárez, presidente de México después de la caída de su adversario Maximiliano. Y si se acepta la idea de que el peruano Alejandro Toledo, que pasó por la universidad de Stanford, no lo era. Ciertamente, no es el primer aimara que ocupó muy altas funciones: antes que él, el profesor Víctor Hugo Cárdenas había sido el vicepresidente de Sánchez de Lozada, durante su primer mandato. Pero Evo Morales es ante todo un campesino sindicalista de origen aimara y de cultura mestiza. Él lo proclama en particular al no adaptarse nunca a las normas de vestimenta de la clase política.⁷⁰ Varios de sus ministros también son de origen campesino e indígena. La Constituyente comprendía a 74 sindicalistas o responsables de asociaciones populares que presentaban las mismas características socioculturales. Para el gran escándalo de las elites dirigentes, legislan campesinos indígenas –y en particular mujeres con ropas tradicionales, que llevan sombreros bombín y polleras, como las vendedoras de los mercados y las que cuidan las llamas–, símbolo de la emancipación social y de la promoción por la democracia.

Como lo hemos visto, la victoria de Evo Morales fue la de la democracia representativa sobre la “democracia de la calle o de la ruta”. Pero el candidato del MAS también prevaleció sobre los partidarios de un poder étnico y de la “reindianización” de Bolivia. A fines de los años noventa, el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), alrededor de su jefe Felipe Quispe, ex y efímero guerrillero del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), quería acabar con el Estado boliviano poscolonial creado por “la evicción y la explotación” de los pueblos

⁷⁰ En un primer tiempo, pulóver y chaqueta de cuero reemplazaron el traje tradicional del dirigente político, lo que suscitó ciertas dificultades protocolares durante el viaje del presidente boliviano a Europa, en febrero de 2006, sobre todo durante su encuentro con el rey de España.

originarios. El Estado nación, para el MIP y los kataristas, es la principal fuente de exclusión. Para recuperar su identidad, las naciones autóctonas deben liberarse del dominio de los blancos y volver a las formas de organización precolonial, restablecer el *collasuyu* del Imperio Inca. Para el MAS y Evo Morales, por el contrario, la preocupación identitaria no es una prioridad. La igualdad y la justicia están en la primera fila de sus objetivos. El Estado es un medio privilegiado para alcanzarlos. En esto son los herederos de la revolución de 1952 y de su estatismo social, más allá del período “neoliberal” marcado por la dominación del mercado. Sin embargo, la dimensión indigenista katarista no está ausente de sus políticas. Ella se suma a las ambiciones revolucionarias y sociales del nuevo poder. En efecto, una vez vencidos electoralmente Quispe y el MIP por Evo Morales, sus partidarios se unieron al nuevo presidente y aportaron sus sufragios a los candidatos del MAS.⁷¹

Por cierto, Morales resistió las reivindicaciones antiblancas más radicales,⁷² pero no puede ignorar que en el censo de 2001 (la categoría de “mestizo” había sido suprimida entonces) el 62% de los bolivianos se autoidentificaban como indígenas. Es cierto que con categorías diferentes, los mestizos habrían representado casi el mismo porcentaje de la población, a tal punto las identidades en Bolivia son fluidas, ambivalentes y cambiantes⁷³ después de cinco siglos de aculturación y cerca de doscientos años de independencia.

Pero las presiones de los militantes de la sociedad civil no son los únicos factores de etnización del poder refunda-

⁷¹ De paso, puede observarse que el vicepresidente Álvaro García Linera, que no es indígena, participó con Felipe Quispe en la guerrilla katarista del EGTK.

⁷² Algunos etno-nacionalistas exigían cuotas étnicas para las elecciones de la Constituyente.

⁷³ Véase Jean-Pierre Lavaud e Isabelle Daillet, *La Catégorisation ethnique en Bolivie. Labellisation officielle et sentiment d'appartenance*, París, L'Harmattan, 2007.

dor. Evo Morales extrae su legitimidad exterior y su prestigio internacional de su calidad de “primer presidente indígena de América”. Su comunicación está centrada en sus orígenes aimaras, no en su mestizaje cultural. A los ojos de los responsables extranjeros, el “presidente indígena” hace pasar a un segundo plano al cocalero tratado por Washington como un narcotraficante. Por el contrario, tiene su lugar de pleno derecho en la emergencia de los nuevos actores promovidos por el “decenio de los pueblos indígenas” de la Organización de las Naciones Unidas (1991-2002). Participa de una dinámica en la cual su gobierno en ocasiones llegó muy lejos.

Así, un ministro de Educación, Félix Patzi Paco, fue el primero en darse como tarea “descolonizar la enseñanza”, liberándola de una concepción “eurocéntrica” y de una visión unilineal de la historia marcada por los conceptos de progreso, de evolución, de desarrollo y de civilización.⁷⁴ Según los partidarios de este abordaje, en virtud del cual Bolivia no efectuó en 2006 un “giro a la izquierda” sino un “giro anticolonial”, la concepción de la democracia boliviana debe asumir sus raíces comunitarias e indígenas. Por esa razón, en materia de justicia, la nueva Constitución integró además los procedimientos jurídicos propios de los “pueblos indígenas autóctonos campesinos”. Esta justicia, cercana y gratuita, hecha por las autoridades comunitarias (*curaca* y *malku*), en adelante es reconocida. Lo que es perfectamente legítimo culturalmente y en la práctica. Pero nada está previsto para articular el derecho consuetudinario, oral y fragmentado, con las leyes, los códigos y la jurisprudencia nacional de un Estado nación unitario.⁷⁵ Los ciudadanos bolivianos ¿seguirán siendo iguales en derecho?

⁷⁴ Félix Patzi Paco, “Descolonizar la educación”, en *Archivos del Presente*, núm. 41, Buenos Aires, 2006, p. 125.

⁷⁵ Para la defensa de la justicia consuetudinaria, véase el artículo de la ministra de Justicia, Casimira Rodríguez Romero, “La justicia comunitaria”, en *Archivos del Presente*, *op. cit.*, p. 125. Sobre el pensamiento etnicista radical, véase Félix Patzi Paco, “La revuelta indígena en defensa del gas y el derro-

La Bolivia en curso de refundación se debate en esta tensión entre pueblos y Estado, naciones y Nación. La singularidad de la experiencia es fuerte, su opacidad no lo es menos. Se agrava por la estrategia de la oposición y la práctica participativa del MAS. Frente al supremacismo criollo de los oponentes territorializados que no disimulan mucho su racismo anticolla e impugnan ese poder “indigenista”, el gobierno endureció el etnicismo, que por otra parte se esfuerza por frenar. Por lo demás, el estilo del MAS, partido de cultura sindicalista, en ocasiones es contradictorio e induce a menudo a la confusión. Este movimiento sigue siendo una coalición cambiante de movimientos sociales con objetivos corporativos. Por eso los reacondicionamientos ministeriales son frecuentes y difíciles de interpretar.

De hecho, aquí se enciman y se entremezclan varias concepciones de la democracia. Como la revolución de 1952, la nueva Bolivia privilegia la democratización respecto de la democracia. El contenido social no sustituye el respeto por las reglas institucionales, pero las relativiza, máxime cuando, en virtud de la lógica de las comunidades indígenas, el unanimismo es de rigor y el oponente minoritario está llamado a alinearse, bajo la pena de excluirse. Algunos llegan incluso a considerar que, como tecnología social, la rotación obligatoria de las funciones públicas, tal y como se practica en los pueblos y las “naciones” autóctonas, volvería caducos a los partidos que dividen e inútiles a las elecciones.⁷⁶ La fórmula-eslogan “mandar obedeciendo”⁷⁷ resume muy bien esta cultura política, donde un mandato imperativo es sometido en forma permanente a las decisiones de la base popular. Paradójicamente, frente a esta crea-

camiento de Gonzalo Sánchez de Lozada”, en *Participación política, democracia y movimiento indígena en los Andes*, La Paz, IFEA/PIEB, 2005, pp. 38-50.

⁷⁶ Véase Félix Patzi Paco, “Descolonizar la educación”, *op. cit.*, p. 129.

⁷⁷ Para la discusión de este eslogan, véase Jorge Lazarte, “Bolivia en tiempo de Evo”, *op. cit.*, p. 213.

tividad política, la impugnación de derecha, favorable a las reformas antiestatales y al antiguo régimen de participación restringida, se erige en defensora del orden jurídico y de la democracia.

En Ecuador, el presidente refundador no es ni un militar ni un jefe sindical, sino un joven profesor universitario que anunció una revolución ciudadana y nacionalista; porque la crisis financiera de fines del siglo XX desnacionalizó el país: dolarización y emigración fueron sus consecuencias más manifiestas. A causa de eso, Correa estima que la deuda social debe prevalecer sobre la deuda externa, cuya legitimidad cuestiona y se niega a honrarla en su totalidad, como lo hicieron algunos de sus predecesores de los años ochenta. Pero sobre todo, Correa hace recaer en la clase política incapaz y/o corrupta la responsabilidad principal de la situación actual, donde el 20% más pobre de la sociedad se empobreció todavía más durante los últimos diez años.⁷⁸

En este contexto, el presidente se propone edificar una nueva arquitectura política, que reforzaría el Ejecutivo y restituiría al Estado un papel predominante. Pero por el momento, todavía no anunció vastos proyectos de nacionalización, ni en la energía ni en otros sectores. La expropiación de los grandes dominios rurales tampoco está en el orden del día. Su política económica es prudente: el aumento de los gastos sociales sigue siendo moderado y atañe únicamente a la salud y a la educación; los programas sociales se concentran en las ayudas para la vivienda de los más pobres, los subsidios a los niños escolarizados y las subvenciones a los productos energéticos de primera necesidad (gas, petróleo, electricidad).

Es así como Correa lleva a su país, “desnacionalizado” por el “régimen de los partidos” y el “neoliberalismo”, por la

⁷⁸ Véase World Bank, *Virtuous Circles of Poverty Reduction and Growth*, Latin American and Caribbean Studies, 2006, p. 36.

vía del nacionalismo. Debido a eso, cierta desconfianza para con Estados Unidos está a la orden del día. El arrendamiento de la base de Manta, que sirve a Estados Unidos para garantizar la vigilancia antidroga, no fue renovado. El proyecto de acuerdo de libre comercio fue abandonado porque la economía es considerada demasiado frágil y destruiría el sector agrícola. Es cierto que no tenía ninguna posibilidad de ser ratificado por el Congreso estadounidense. Pero el vecino Brasil no es mejor tratado que Estados Unidos, en el caso de la deuda pública o de los activos de las empresas. Y la “revolución” ecuatoriana dice ser ética y no étnica, aunque ese país andino comprende una fuerte minoría indígena. El nuevo presidente, que no vacila en fustigar a los bancos, los medios, los partidos y las elites tradicionales, tiene la ambición de instaurar en ese país un orden estable, y sobre todo más justo.

La Constitución refundadora, aprobada en septiembre de 2008, abre también el camino a reformas sociales en materia de planificación familiar y de “género” de los cónyuges. En estos campos, el humanista cristiano no vaciló en desafiar con valentía la hostilidad de la Iglesia católica, de los partidos tradicionales y del *establishment* social.

Correa fue plebiscitado tres veces. No sólo porque restableció la autoridad del Estado y las competencias del Ejecutivo contra los desórdenes y el quiebre de una democracia perpetuamente vacilante, sino porque en el centro de la Constitución puso el bienestar social (“el buen vivir”) como objetivo supremo del Estado.

EL POPULISMO ¿ESTÁ DE VUELTA?

Cabe sorprenderse de que hayamos intentado describir experiencias singulares de regímenes antipolíticos o de democracias hegemónicas sin tacharlas de populistas, ese epíteto

peyorativo que habitualmente las califica. Es evidente que esta omisión es deliberada. Se trataba ante todo de identificar a este tipo de gobiernos en su singularidad, de circunscribir y hasta de decodificar sus prácticas políticas reales, y no de estigmatizarlos con una palabra. Frente a lo desconocido, lo confuso, lo inclasificable, por supuesto que la etiqueta, así sea incierta, tranquiliza. Uno se vería mucho más tentado a convocarla en la medida en que, en efecto, se asiste al gran retorno del populismo en el mundo de los medios y en el vocabulario de los comentaristas políticos. Clásicamente, para los historiadores, el término abarcaba la ira de los granjeros del Middle West contra los financistas y los políticos de la costa Este en Estados Unidos, o bien incluso, casi en la misma época, los impulsos anarco-bucólicos de los intelectuales rusos que, perturbados por la miseria de los *mujiks*, iban al pueblo. Hoy en día se usa a diestra y siniestra para calificar y descalificar fenómenos políticos contemporáneos detestados y, de hecho, a menudo detestables.

Su gran retorno en Europa, y su uso polémico, son contemporáneos del surgimiento de una extrema derecha popular que obtiene indiscutibles éxitos electorales.⁷⁹ Pero este pseudoconcepto, reflejo de una “ideología blanda”,⁸⁰ que sirve de “palabra encubridora” o de “palabra muleta”,⁸¹ extendió su campo y en adelante sirve para deslegitimar al ad-

⁷⁹ Véase el documento “Populistes et ultranationalistes en Europe centrale”, en *Le Monde*, 20 de octubre de 2006, y el artículo anunciado en primera plana de *Aujourd'hui en France* del 26 de octubre de 2006: “Le populisme, qu'est-ce que c'est?”.

⁸⁰ Jean-Pierre Rioux, “Le peuple à l'inconditionnel”, en Jean-Pierre Rioux et al., *Les Populismes*, París, Perrin, 2007, pp. 13 y 14.

⁸¹ Palabras que, según Pierre Rosanvallon, traducirían la doble comprensión del populismo, en cuanto movimiento o partido (como patología de la democracia), pero también como pieza maestra de la “contrademocracia”. Véase Pierre Rosanvallon, *La Contre-démocratie. La politique à l'âge de la défiance*, París, Seuil, 2006, p. 269 [trad. esp.: *La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza*, Buenos Aires, Manantial, 2007].

versario político.⁸² Por otra parte, hasta los defensores de la ortodoxia económica y de la desregulación sacaron partido de esta moda semántica. Los programas sociales redistributivos, las políticas industriales, el *welfare state* y hasta el colbertismo eran todavía, hasta hace poco, considerados como manifestaciones lamentables de “populismo económico”.⁸³ Es cierto que los hipercríticos del fundamentalismo del mercado les pagaban con la misma moneda emprendiéndola de buena gana con el “populismo neoliberal”.⁸⁴

La fortuna del concepto suscitó una multiplicidad de coloquios, seminarios y la publicación de excelentes estudios monográficos. Pero éstos no hacen sino subrayar el carácter dispar de las experiencias reunidas bajo el término de populismos. Y esto pese a las tentativas de dar a dicho concepto todo uso sus cartas de nobleza unificadora a través del análisis comparado o la teoría política.⁸⁵

En América Latina, la noción de populismo está ilustrada por la historia: el término se aplica ante todo a regímenes populares encarnados por hombres fuertes entre 1930 y 1950.⁸⁶ Los nombres se imponen: Perón en Argentina, Vargas en Brasil, Velasco Ibarra en Ecuador, a los que en ocasiones se añade el de Cárdenas en México. La expresión, por confusa y defectuosa que sea, sirve entonces de apelativo contro-

⁸² De ahí su éxito en el curso de la campaña presidencial francesa de 2007. Véase “Vous avez dit populiste?”, en *Le Monde* 2, 4 de noviembre de 2006.

⁸³ Véanse, por ejemplo, “March of the Populists”, en *Newsweek*, 29 de mayo de 2006, y “Populism, Fanfare for the Common Man”, en *The Economist*, 25 de noviembre de 2006.

⁸⁴ Véase Kurt Weyland, “Neoliberal Populism in Latin America and Western Europe”, en *Comparative Politics*, 31/4, julio de 1989.

⁸⁵ Para el análisis comparado, véase Guy Hermet, *Les Populismes dans le monde*, París, Fayard, 2001, y para la teoría política, véase Ernesto Laclau, *La Raison populiste*, París, Seuil, 2008 [trad. esp.: *La razón populista*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005].

⁸⁶ Véanse las obras de Octavio Ianni, *La formación del Estado populista en América Latina*, México, Era, 1975, y Francisco Weffort, *O populismo na política brasileira*, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1978.

lado para identificar regímenes que no pueden ser comprendidos por medio de los conceptos europeos. Se entenderá con facilidad la razón de este deseo de emancipación de los conceptos centrales. En la misma época, en efecto, florecen en Europa los regímenes autoritarios de derecha y los fascismos. Ahora bien, en América Latina, los Estados llamados populistas no son ni antidemocráticos ni antiobreros. Generalmente están ligados a la emergencia de la industria y sostenidos por las clases populares urbanas. Lejos de abolir el sufragio universal en nombre de otra legitimidad, lo reivindican, y en ocasiones hasta lo han restablecido. En Brasil, en 1930, Vargas impone contra las oligarquías regionales el voto secreto que, es cierto, sólo entrará realmente en vigor en 1945. El coronel Perón, por su parte, participa en el golpe de Estado ambiguo de junio de 1943 que pone fin a una "década infame" de fraude electoral crónico. Elegido regularmente presidente en 1946, será reelegido en 1951. En Ecuador, Velasco Ibarra hace campaña contra el fraude electoral, "por la defensa de las libertades y sobre todo la del sufragio".⁸⁷

Pero en América Latina, la palabra "populismo" evoca caudillos urbanos adulados por las masas y fuertemente sospechados de demagogia. "Denme un balcón y reconquistaré el poder", se jactaba Velasco Ibarra. Sin embargo, como se sabe, la demagogia, así fuera plebiscitaria, nunca es otra cosa que una reacción pasajera. Ahora bien, uno se siente impactado por la longevidad política de los líderes llamados populistas, que marcaron su época en forma duradera, y a veces la vida política de su país de manera irreversible. Así, Velasco Ibarra, el "apóstol de los olvidados" ecuatoriano, fue elegido cinco veces jefe de Estado entre 1934 y 1956. Getulio Vargas, el "padre de los pobres", dominó la escena

⁸⁷ Discurso de José María Velasco Ibarra del 27 de enero de 1961, citado en Osvaldo Hurtado, *El poder político en el Ecuador*, Quito, Universidad Católica del Ecuador, 1977, p. 201.

política brasileña de 1930 hasta su suicidio en 1954. Y generalmente se considera que la era getulista sólo termina con el golpe de Estado militar de 1964. Elegido presidente por sufragio universal en 1950, su suicidio lo convirtió en un mártir religiosamente venerado en los medios populares. Pero la cumbre de la fidelidad popular (¿populista?) se alcanza con Perón, "el primer trabajador", derrocado por los militares en 1955. A pesar del exilio, del ostracismo y de la proscripción que golpeó a su movimiento durante 18 años, nunca perdió a sus partidarios, muy por el contrario. Y en 1973, para poner fin a una situación explosiva provocada, entre otras cosas, por la exclusión del peronismo de la vida política, el viejo general es plebiscitado y vuelve al poder como pacificador. Muere en 1974, pero desde entonces cuatro presidentes constitucionales lo reivindicaron.

Podría pensarse que el epíteto populista no le sienta bien a un presidente revolucionario mexicano que maniobraba en el marco de la "dictadura" impersonal del partido-Estado y no reelegible por naturaleza. Y sin embargo Lázaro Cárdenas —que durante su sexenio (los seis años de su mandato constitucional de 1934 a 1940) contribuyó a estructurar esa autocracia electiva— conservó una inmensa popularidad hasta el final de su vida, en 1970. Y la esfinge de Jiquilpan pesó sobre los destinos de su país como ningún otro presidente antes o después. Por eso, la Revolución Mexicana en sus aspectos más innovadores y el régimen que de ella surgió son asimilados a Cárdenas y al cardenismo, cosa de la que sus descendientes directos parecen haber sacado cierto provecho político, por otra parte.⁸⁸

El rasgo común de estos regímenes singulares reside en su política social en favor de los trabajadores urbanos. Ésta,

⁸⁸ Véanse Fernando Benítez, *Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana*, México, Fondo de Cultura Económica, 1978, y Arnaldo Córdova, *La política de masas del cardenismo*, México, Era, 1974.

en ruptura con el *laisser-faire* conservador, aparece como casi revolucionaria, y la mayoría de las veces intolerable para las elites. El llamado a las capas populares y a los desfavorecidos colorea así la retórica de los líderes, sobre todo cuando utilizan contra sus adversarios los calificativos infamantes con que éstos disfrazan a sus partidarios: descamisados peronistas o “chusma” velasquista.

Mientras que esos países se urbanizan e industrializan, en los años treinta y cuarenta del siglo pasado la cuestión social sigue siendo un problema de orden público y simplemente policial. En Argentina, oficiales nacionalistas, entre ellos Perón, se inquietan por las perturbaciones previsibles en la posguerra inmediata: la insensibilidad y la ceguera de las clases dirigentes frente a los problemas sociales no preparan realmente al país para enfrentarlos. Su plan de acción es sencillo. Comprende tres secciones: una política social generosa, la organización de los trabajadores en sindicatos puestos bajo el control del gobierno, la instauración de un Estado fuerte (capaz de hacer respetar sus decisiones por los “agentes sociales”). Este proyecto, inspirado por la preocupación de la paz social, está fundado en la intervención (iné dita) del Estado en las relaciones laborales. A Perón le significa una popularidad inmensa en los medios obreros: las capas populares hasta entonces ignoradas ven que se les reconoce una dignidad sin precedentes.

Perón reorganiza los sindicatos, de los que excluye a los extremistas; luego hace adoptar, en favor de los obreros, una legislación avanzada (vacaciones pagas, jubilaciones, convenciones colectivas, seguro por enfermedad, etc.). La seguridad social administrada por los sindicatos, el alojamiento popular y hasta la participación en las utilidades son otras tantas medidas destinadas a construir una Argentina “socialmente justa”. La participación de los sindicalistas en las funciones administrativas y en la vida parlamentaria modifica en forma duradera el paisaje político. Por último, los más

desfavorecidos son socorridos por la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, que dispone de recursos tan vastos como arbitrariamente obtenidos. Los objetivos políticos de sus realizaciones espectaculares (hospitales, casas maternas, ciudades infantiles) no dejan lugar a dudas.

En Brasil, luego de la revolución de 1930, Vargas refuerza el poder central y promulga una ambiciosa legislación social en favor de los trabajadores urbanos (y sólo de ellos). La creación del ministerio de Trabajo, Industria y Comercio, llamado “ministerio de la revolución”, simboliza el nuevo régimen. La vieja república, por su parte, no se preocupaba por el mundo del trabajo. Ahora bien, el clientelismo tradicional no funciona en la industria. La fábrica no es la *fazenda*. Y la política neobismarckiana de Vargas apunta a impedir la organización independiente de los asalariados urbanos al tiempo que se les otorgan derechos sociales relativamente importantes. Desde el primer decreto sobre los sindicatos en 1931 hasta la publicación, en 1943, del compendio consolidado del derecho del trabajo, siempre en vigor, la legislación es proliferante y voluntarista. Se instauran el salario mínimo, la limitación de la duración semanal del trabajo, las vacaciones pagas. La huelga es declarada ilegal, pero los conflictos laborales son obligatoriamente sometidos a instancias públicas de conciliación y arbitraje. El sindicato único, por categoría profesional, debe ser reconocido por el ministerio de Trabajo. Todos los asalariados aportan al sindicato –institución decretada de interés público– una cuota (el “impuesto sindical”) retenida sobre el salario.

En México, Lázaro Cárdenas es recordado como el presidente que contribuyó a poner fin a los enfrentamientos en el interior de la familia revolucionaria. Bajo su conducción, la gigantesca perturbación desatada en 1910 adquiere una forma institucional y estatal. Cárdenas también va a acelerar la reforma agraria, origen y motor del levantamiento revolucionario. Extiende así la propiedad comunitaria del ejido para

desactivar los conflictos rurales. Pero es el conjunto de la sociedad lo que va a reorganizar bajo la tutela del Estado. El partido oficial, llamado de la Revolución Mexicana, antepasado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es un partido de corporaciones. Integra las instituciones sectoriales de los obreros, de los campesinos, de los funcionarios, e incluso durante un tiempo, de los militares, con miras al "ejercicio de la democracia" bajo el control del Estado. El pueblo "revolucionario" obtiene selectivamente ventajas que no siempre son marginales (seguridad social, alojamiento, empleo, crédito). El nacionalismo aporta su basamento ideológico: la "expropiación petrolera" de 1938, año de la nacionalización de las compañías extranjeras, es así sacralizada. Sin embargo, hay que comprender bien que la propaganda patriótica y revolucionaria no tiene por objetivo movilizar, o raramente lo tiene, sino más bien amordazar los conflictos de clase en nombre de un imperativo nacional de solidaridad.

¿Asistimos, en el siglo XXI, a un resurgimiento de ese "populismo" histórico? Las similitudes y los puntos en común parecen numerosos. El uso plebiscitario del sufragio, las políticas sociales selectivas, el refuerzo del Estado, la democracia dirigida o hegemónica son sus rasgos más concretos. No es posible ignorar tampoco la antipolítica originaria, las vituperaciones contra las elites o contra el capital extranjero en nombre de la independencia nacional. El papel del nacionalismo, a menudo codificado en antinorteamericanismo, parece recurrente, hasta la imitación a veces servil, como el eslogan electoral "Bush o Chávez" de 2007 en el que claramente repercutía el "Braden o Perón" de la campaña presidencial argentina de 1946.⁸⁹

No obstante, existe una diferencia fundamental entre los dos períodos nacional-populares. En el siglo XXI, los regímenes

⁸⁹ Spruille Braden era entonces el muy poco discreto embajador de Estados Unidos que apoyaba públicamente a los adversarios del coronel.

refundadores no están articulados en la relación Estado-sindicatos y no se apoyan en las clases obreras organizadas, que no son ya sectores sociales disponibles, en espera, porque están integrados bajo otros auspicios, como en Venezuela, donde el sindicalismo está consolidado en la esfera de influencia de los partidos de la socialdemocracia y de las formaciones de izquierda, o bien porque los sectores sindicalizados entraron en crisis y se disolvieron. Así, en Venezuela, Chávez encuentra sus apoyos entre los marginales del sector informal. En Bolivia, los mineros de la Central Obrera Boliviana (COB), antaño poder político de primer plano, no se reconocen en los nuevos dirigentes nacionales surgidos de los sindicatos campesinos o de organizaciones del sector informal, productos, justamente, del derrumbe del sector minero.

CLASES PELIGROSAS: LAS LECCIONES DEL PASADO

Entonces, ¿de qué depende, fundamentalmente, el aparente resurgimiento de esos regímenes, a la vez familiares e inclasificables? Los gobiernos refundadores de ayer y de hoy ¿responden a causas análogas, tienen orígenes similares? Es posible seguir considerándolos, por cierto, productos de una enfermedad infantil de la democracia. Pero esta interpretación, aceptable para explicar ciertos fenómenos en el siglo XX, lo es mucho menos en el siglo XXI, sobre todo en un país como Venezuela, que conoció medio siglo de democracia pluralista. A menos que se considere que el populismo es la "forma constitutiva de la democracia en América Latina".⁹⁰ Precisamente para responder a estas preguntas

⁹⁰ Carlos de la Torre, "¿Es el populismo la forma constitutiva de la democracia en América Latina?", en José María Cárdenas *et al.*, *Debate sobre la democracia*, *op. cit.*, pp. 144-151, y también Nicolás Lynch, *Política y antipolítica en el Perú*, Lima, Desco, 2000, p. 163.

sería útil comparar los regímenes entre sí, así como las coyunturas que los vieron nacer.

El período “populista” del siglo xx parece corresponder muy bien a un giro, a un momento de profundos cambios económicos y sociales. Los años treinta y cuarenta asistieron a la desorganización de las corrientes comerciales tradicionales y a la crisis de los sistemas agroexportadores, provocados por la gran depresión y la Segunda Guerra Mundial. Estos dos fenómenos ligados volvieron a poner en entredicho en todas partes el esquema de dominación que hasta entonces prevalecía. En los países más modernos, el desarrollo del sector industrial, el ajuste de los equilibrios sociales en función del nuevo polo dinámico de la economía crean una situación de disponibilidad de las clases populares urbanas, nuevas o viejas, y a la vez de vacío político. Pero la revolución de las expectativas tropieza aquí, como en el Viejo Mundo, con el gran miedo de los pudientes. En Europa, la derecha se radicaliza y se masifica. Los conservadores buscan su salvación en la contrarrevolución. Mientras que los regímenes autoritarios antibolcheviques se multiplican, el corporativismo mussoliniano hace escuela. Pero el contexto social latinoamericano es totalmente diferente.

En Argentina, el crecimiento del proletariado urbano tropieza, como vimos, con la indiferencia atemorizada de las elites. En Brasil, del mismo modo, la urbanización galopante durante ese período y la “movilización social” que lo acompaña agravan las querellas interoligárquicas, que desembocan en el derrocamiento de la vieja república. Los Estados federados, que producen para el mercado interno, se sublevan entonces contra San Pablo, cuyo único objetivo nacional es la valorización del café. Las clases medias emergentes, funcionarios, jóvenes oficiales, exigen un Brasil unitario frente a la fragmentación orquestada por la “política de los gobernadores”. El empresariado industrial y comer-

cial denuncia entonces a los agitadores foráneos y a las “ideologías exóticas” que se infiltran en los talleres y se ganan los favores de una clase obrera sin derechos...

En Ecuador, las migraciones internas provocadas por la gran crisis de 1929 multiplican a los marginales, que escapan al control clerical-conservador de la Sierra, mientras que la burguesía liberal los ignora. El subproletariado de Guayaquil, formado en gran parte por los expulsados del sector rural arcaico, constituirá el grueso de las tropas de Velasco Ibarra tras la reacción conservadora de 1932. Y en efecto, Ecuador atraviesa un episodio singular y poco conocido: una experiencia progresista de seis años.

En 1925 jóvenes militares reformistas toman el poder. Su objetivo proclamado es “la igualdad para todos y la protección del proletariado”. Promulgan algunas leyes en favor de los trabajadores, crean instituciones que permiten la intervención del Estado en la esfera económica y social. Pero el reformismo de esta Revolución de Julio no beneficia más que a los trabajadores urbanos y estables del sector formal, muy poco numerosos. Por otra parte, la dinámica de las reformas es poco a poco sofocada por la alianza de los oficiales de Julio con la oligarquía rural de la Sierra.⁹¹ El velasquismo se convertirá en el heredero de esas esperanzas decepcionadas.

México, desquiciado y fragmentado por dos decenios de guerra civil y de luchas de clanes, bajo Cárdenas va a tratar de encauzar el flujo revolucionario y de estabilizar el nuevo régimen contra un retorno violento de la derecha clerical. El socialismo agrario, la organización corporativista de los trabajadores de las ciudades y el campo, así como la retórica obrerista, permitirán alcanzar ese objetivo en el curso de un solo mandato presidencial.

⁹¹ Sobre la revolución de Julio, véase Agustín Cuevas, *El proceso de dominación política en el Ecuador*, Quito, 1974, pp. 19-25.

Estas diferentes experiencias políticas, contemporáneas de los autoritarismos europeos de entreguerras, no tienen nada que ver con la dictadura del proletariado (a pesar de su violencia verbal y de la retórica de clase), ni con los regímenes de tipo fascista, aunque la inspiración corporativista italiana, aquí o allá, sea fácilmente detectable, porque el Nuevo Mundo tiene su propia lógica de evolución histórica. Por supuesto, los regímenes latinoamericanos involucrados tienen muchos rasgos comunes, pero si la personalización del poder presidencial es un elemento de semejanza aparente, ciertamente no es lo más decisivo. Por lo demás, éste es un rasgo frecuente en una América Latina marcada por el presidencialismo. De hecho, es la integración/cooptación de los trabajadores de las ciudades (más raramente de los campesinos) bajo el control del Estado lo que forma el núcleo duro de esa lógica recurrente. Esta inclusión controlada se efectúa en apariencia contra las oligarquías locales, pero también, y a veces más, contra la autoorganización de las clases populares. De este modo, los sindicatos "estatizados", las medidas sociales avanzadas y el clientelismo son los elementos constitutivos de lo que se puede llamar una desmovilización no coercitiva de las clases peligrosas.

Esta política de "salvar lo que se pueda" fue cínicamente explicada por Perón en sus discursos de los años 1945-1946, e inscrita en diferentes formulaciones que resumen sus objetivos y sus métodos. En ocasión de una alocución, el ardoroso coronel, dirigiéndose al empresariado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, explicitaba en estos términos su estrategia: "El seguro contra la agitación es la organización de las masas. El Estado suministra el contraseguro que es la autoridad necesaria".⁹² El primer peronismo es esencialmente un proyecto de defensa social. Para sus instigadores,

⁹² Juan Perón, discurso del 25 de agosto de 1944, en Juan D. Perón, *El pueblo quiere saber de qué se trata*, Buenos Aires, s. e., 1944, p. 183.

Argentina, cerca de la posguerra, baila sobre un volcán. La insensibilidad social de los pudientes y de los partidos de gobierno, el ascenso del proletariado y la "agitación comunista" conforman una conjunción explosiva. El recuerdo de las huelgas insurreccionales y de la "semana trágica" de 1919⁹³ obsesiona a mentalidades desquiciadas por la guerra civil española. Alejar a los "extremistas", organizar sindicatos "nacionales", responder a las legítimas reivindicaciones obreras: tal es el programa del nuevo poder.

En Brasil, Getulio Vargas quiere hacer la revolución antes de que la haga el pueblo. No se trata de "cambiar todo para que nada cambie", sino de promulgar de forma autoritaria reformas preventivas. Mediante la satisfacción (relativamente limitada) de las reivindicaciones sociales, y sobre todo el reconocimiento inédito que le es concedido a cambio, el Estado puede apelar a los trabajadores sobre los cuales se apoya y que mantiene en libertad vigilada. La ideología nacionalista y popular concibe al pueblo como una entidad, que reúne al conjunto de la comunidad nacional en sus intereses comunes. De ella no están excluidas más que minorías ligadas al "enemigo exterior", de la que forman parte las organizaciones de izquierda, y en particular los comunistas. Pero si Argentina, en efecto, conoció un "antibolchevismo sin comunistas", en Brasil la "amenaza comunista" será más creíble tras la desdichada aventura insurreccional de 1935, de la que el gobierno de Vargas había sabido sacar el mejor partido represivo, al punto de hacer referencia, en 1937, a un complot comunista apócrifo para justificar la dictadura. En México, la incorporación de las clases populares al partido-Estado está destinada ante

⁹³ En enero de 1919, choques entre huelguistas de una empresa metalúrgica y fuerzas del orden habían degenerado en motines, que provocaron numerosos muertos. Un poco más tarde (en 1921) estallaron huelgas insurreccionales en la Patagonia, fruto de la crisis de la lana. Fueron reprimidas de manera despiadada por el Ejército.

todo a frenar el movimiento campesino independiente desatado por la revolución.

En el fondo, puede decirse que la estatización de las organizaciones socioprofesionales y el clientelismo masivo burocratizado desempeñan un papel preventivo contra la revolución, que la retórica popular y algunas políticas sociales avanzadas tienden a disimular. Sin duda, los regímenes populares refundadores del siglo XXI son fundamentalmente distintos de sus predecesores del siglo anterior, pero también ellos quieren "salvar lo que se pueda" y responden con reacciones defensivas frente a amenazas que pesan sobre el orden político y social. Sin la explosión del Caracazo, ese levantamiento violento de las clases peligrosas venezolanas, sin duda no habría existido una revolución bolivariana. En Bolivia, la amplitud de la protesta social y la incapacidad del régimen de los partidos en darle respuesta en efecto invitaban a refundar la república para desactivar una situación explosiva.

El avance contestatario, por otra parte, es realmente una de las tendencias pesadas del comienzo de este siglo en el continente. El ascenso de la oposición antisistema expresa un evidente y duradero malestar social. Tras la "década perdida" de los años ochenta, con la crisis de la deuda, América Latina intentó adaptarse a las nuevas circunstancias internacionales. Para ello se pusieron en marcha, a menudo con una extremada brutalidad (en la que las instituciones financieras internacionales tienen su parte de responsabilidad), políticas de ajuste liberales. La panoplia de estas recetas importadas e inadaptadas es conocida: apertura de la economía, privatizaciones, desregulación, reducción del Estado y transferencia al mercado de los servicios públicos de base. Estas medidas de "desestatización competitiva" tuvieron en todas partes las mismas consecuencias. Provocaron un aumento incontrolable de la desocupación y la reducción del sector formal del empleo. La

pobreza y la exclusión se incrementaron. Las desigualdades dieron un salto espectacular en sociedades que de por sí se hallaban entre las más desiguales, en las que de manera totalmente inoportuna se suprimieron la mayoría de las redes de protección social. Pero esta regresión se produjo en sociedades muy urbanizadas y movilizadas en las cuales los controles tradicionales ya no funcionaban. Las reformas liberales pasaron por ahí. Una modernización "capital intensiva" y la prosperidad primaria volcada hacia el exterior hicieron de algún modo que la democracia pluralista fuera menos capaz de reducir la exclusión o de volverla tolerable.

Por otra parte, el malestar social no se manifiesta solamente por la instauración de regímenes de tipo plebiscitario. Existen derrotas tan reveladoras como algunas victorias. Así, como hemos visto, en México, el popular ex alcalde de México, Andrés Manuel López Obrador, fue vencido sólo por el 0,6% de los sufragios por su adversario conservador. Ahora bien, su eslogan de campaña era: "Los pobres primero", reivindicando la tradición revolucionaria de Lázaro Cárdenas. Ocurre que, desde 1988, en nombre de la modernización liberal, los gobiernos sucesivos del PRI habían "desmantelado los amortiguadores sociales"⁹⁴ del período cardenista y liberado al electorado popular del corsé corporativo. En Perú, un oscuro oficial sin partido ni apoyos institucionales, Ollanta Humala, logró movilizar en seis meses el 47% de los sufragios. Prevalció muy ampliamente en el sur, la Sierra indígena y las regiones más desfavorecidas, mientras que su adversario ganaba la elección en las zonas costeras y los centros mineros del "Perú útil".

⁹⁴ Marie-France Prévost-Schapira, "La ciudad de México, el PRD en el poder. Territorios de la participación y gobierno de la ciudad", en Isidoro Cheresky, *Ciudadanía, sociedad civil y participación política*, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2006, pp. 511 y 512.

BARRABÁS Y LA DEMANDA DE CIUDADANÍA

Los gobiernos que entran en el terreno del modelo nacional-popular no son antidemocráticos. No sólo surgieron del sufragio universal, sino que buscan más que otros la bendición electoral, y la mayoría de las veces toman la vía plebiscitaria. Pero en nombre del principio de mayoría, o de los intereses nacionales, adoptan libertades con las reglas jurídicas y los preceptos constitucionales. Las escisiones políticas bipolares que provocan desembocan paradójicamente en que los sectores sociales conservadores, que la mayoría de las veces nunca han sido fervientes partidarios de una participación política libre y ampliada, asuman la defensa de la democracia. En 1946 Perón es elegido presidente en contra del candidato de la Unión Democrática, que, alrededor de los radicales, agrupa desde conservadores, expertos experimentados del “fraude patriótico”, hasta comunistas, que rechazan las ventajas sociales otorgadas por el poder a su clientela. En Venezuela, en 1998, el “polo democrático” del conjunto desacreditado de los partidos del Pacto de Punto Fijo hizo frente al “polo patriótico” de Hugo Chávez. En Bolivia, hoy en día, son las elites pudientes de la media luna y las fuerzas de la derecha “contrarrevolucionaria” las que se erigen en defensoras de la democracia.

La extrema polarización obedece de hecho a diferentes causas. La hostilidad virulenta que desencadenan esos regímenes entre sus opositores no siempre se explica por su actitud desenvuelta respecto de las garantías constitucionales o las libertades públicas. Un estilo autoritario, la intimidación del adversario o los discursos incendiarios instauran por cierto el clima buscado por el poder. Pero una de las fuentes principales de la aversión a veces rencorosa que desatan estos gobiernos no está provocada tanto por sus prácticas autocráticas como por las consecuencias sociales de sus políticas. Son subversivos, sin ser realmente revoluciona-

rios, porque cuestionan las jerarquías consagradas, el orden social establecido.

A los ojos de sus opositores, el poder “populista” confunde *populus* y *plebs*. Y ese bajo pueblo se deja atraer por los demagogos y no sabe elegir a los mejores (*sanior pars*). En suma, hizo una mala elección. Barrabás gozó de sus favores. Los representantes de las elites y los partidarios de la concepción liberal de la democracia tienen todos más o menos el mismo lenguaje. Desaprueban a las “masas, que tienen una irresistible tendencia a votar por los canallas”.⁹⁵ Fácilmente se pone su tendencia a seguir a los malos pastores a cuenta de la irracionalidad plebeya, cuando la racionalidad consistiría en apoyar a los conservadores o a los demócratas partidarios del statu quo y de la concentración de los ingresos. Poco más o menos lo que escribía un conservador argentino en los años setenta: “La redistribución más equitativa de las riquezas”, según Benegas Lynch, conduciría a los “gobiernos tiránicos y a la democracia totalitaria”.⁹⁶

Los teóricos marxistas no se quedan atrás. Uno de ellos define el “populismo” como “un virus patológico del movimiento obrero, la manifestación de un retraso ideológico y político de las masas”.⁹⁷ A los ojos del Partido Socialista Argentino en 1946, la clase obrera había vendido su libertad por un plato de lentejas al aceptar sostener a la “tiranía”. La izquierda argentina, Partido Comunista a la cabeza, se opuso en los años cuarenta a los decretos que favorecían notablemente a los sectores que supuestamente ella representaba calificándolos de “limosnas” contrarias a la dignidad

⁹⁵ A *pulha* en el texto original. Véase *O Estado de São Paulo*, 26 de enero de 1947, citado por Francisco Weffort, *O populismo na política brasileira*, op. cit., p. 24.

⁹⁶ Alberto Benegas Lynch, “Democracia y mayoría”, Conferencia en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, 7 de septiembre de 1971, en *Boletín del Museo Social Argentino*, octubre-diciembre de 1971, pp. 353-364.

⁹⁷ Fernando Mires, “Le populisme”, en *Les Temps modernes*, junio de 1979.

de los trabajadores.⁹⁸ Por eso, esa izquierda argentina nunca logró desde entonces “conducir al proletariado [...] a las organizaciones de la clase obrera”, según la fórmula leninista en uso.

La denigración del pueblo no vacila en apelar a la caricatura más grosera, y un espíritu de clase evidente se refuerza a menudo con un desprecio étnico. Así, la burguesía de Buenos Aires calificaba de “negros” (negros, negradas, cabecitas negras) a los partidarios mestizos de Perón surgidos del éxodo rural. En 2006, un periodista de la televisión peruana, decididamente reaccionario y provocador, explicaba el resultado de Ollanta Humala en la Sierra por “la falta de oxígeno que padecen los campesinos de las regiones andinas”.⁹⁹ El “mal pueblo” se equipara con animales indóciles. Un diputado radical trataba a los trabajadores peronistas recientemente llegados del campo de “aluvión zoológico”.¹⁰⁰ Del recurso racista a la figura de la animalidad no se libran siquiera los jefes de Estado: así, Chávez es tratado de mono en un retruécano execrable.¹⁰¹

De hecho, la imagen de estos regímenes modelada por la oposición contribuye a definirlos. Así, el régimen peronista de las dos primeras presidencias (1946-1955) se mostró como “la época de la dictadura donde los obreros se creían todo permitido”. Es cierto que, por primera vez, ¡el peón de granja y la empleada doméstica tenían derechos! Esto claramente se oponía a las jerarquías establecidas, la ideología

⁹⁸ Sobre la posición del Partido Comunista, véase *Esbozo de historia del partido comunista argentino*, Buenos Aires, Anteo, 1948, pp. 136 y 137, y Robert Crassweller, *Perón y los enigmas de la Argentina*, Buenos Aires, Emecé, 1988, p. 196.

⁹⁹ Según el periodista estrella Jaime Bayly, citado por Carmen Rosa Balbi, “Le phénomène Humala”, en Olivier Dabène et al., *Amérique latine, les élections contre la démocratie?*, París, Presses de Sciences Po, 2007, p. 176.

¹⁰⁰ Palabras atribuidas al radical Ernesto Sanmartino, en la Cámara de Diputados.

¹⁰¹ “Mi comandante” se convierte en “El mico andante”.

no igualitaria de la burguesía “pampeana” y la cultura dominante de los “dueños de la tierra” de manera general. Los grupos sociales marginales adquirirían una nueva dignidad, cuya expresión simbólica era lisa y llanamente insoportable para las elites (y hasta para las clases medias).

Otro tanto ocurrió con la turbulenta democratización de los espacios públicos. El peronismo se adueñó de la Plaza de Mayo, espacio de clase de la “gente bien” (la gente decente), donde van a concentrarse en adelante las bandas sindicales procedentes de los suburbios lejanos. En Quito, Velasco Ibarra organizaba las manifestaciones de sus partidarios en lugares del centro de la ciudad de la que hasta entonces habían estado excluidos. En Bolivia, Evo Morales recordaba que, hasta los años cincuenta, los indios no tenían derecho a atravesar la plaza Murillo en La Paz.¹⁰² De igual modo, Chávez transformó el lujoso teatro Teresa Carreño de Caracas en Casa del Pueblo, desde donde arenga a sus partidarios. Sin lugar a dudas, la “barbarie” prevalece sobre la “civilización”.

Finalmente, sólo se puede comprobar que tales regímenes asumen papeles contradictorios. Apelan al apoyo de las clases populares, potencialmente peligrosas, pero se esfuerzan por controlarlas eternizando el modelo económico y social dominante. Se apartan de las modalidades pasivas y tradicionales de obtención del consentimiento de las capas sociales subordinadas, pero no por ello practican su exclusión por la fuerza, puesto que, por el contrario, se preocupan por integrarlas. Sin duda, de ahí viene esa dimensión de psicodrama ruidoso, y en ocasiones inexplicablemente brutal, que los caracteriza. Hasta se diría a menudo que anun-

¹⁰² Estos lugares de prestigio y poder sólo debían ser frecuentados por gente “bien vestida”, es decir, a la europea, con “saco y corbata” para los hombres, que no era ni la ropa de los obreros de Buenos Aires ni la de los indios en La Paz. En los años sesenta, en Caracas, todavía estaba prohibido atravesar la plaza Bolívar en mangas de camisa.

cian la inminencia de la guerra civil, mientras que, por naturaleza, están destinados a evitarla.

Lo que ocurre es que, por lo general, la violencia verbal aquí es privilegiada. La sentencia a muerte simbólica o virtual de los enemigos –oligarquías, imperialismo, capitalismo– es frecuentemente invocada. Es el caos en nombre del orden. Se ladra sin morder. De hecho, casi no se tocan los intereses que se amenaza. Las reformas estructurales, cuando se las emprende, son embrionarias y moderadas. Pero la lógica de un cambio selectivo en esas sociedades adscriptivas de estratificación rígida siempre provoca una división en dos campos, la designación de un enemigo, discursos maniqueos. La designación del enemigo interno o externo, a menudo los dos a la vez, no es un epifenómeno parasitario, sino perfectamente funcional. La “revolución” es jugada en forma permanente. La división del cuerpo social es teatralizada. El discurso excluyente apunta de hecho a la integración. El conflicto dramatizado es vivido como una inclusión de los marginados. Por lo tanto, es profundamente democrático, o por lo menos democratizante y portador de ciudadanía. El antipueblo construye el pueblo.

Resta examinar las razones inmediatas del surgimiento de tales regímenes, que la ecuación personal del líder o su gusto por el poder no explican en su totalidad. Hemos evocado el peso de las coyunturas. La acumulación de demandas insatisfechas y la incapacidad del sistema representativo de responder a ellas, en efecto, a menudo constituyen los disparadores de una crisis que conduce al cambio de régimen. En ausencia de consenso sobre las reformas necesarias para la preservación del sistema, sobreviene el hombre providencial. ¿No es el único, al apoyarse en la dinámica mayoritaria, que puede quebrar las rigideces y desbloquear una situación amenazadora o insostenible? En 2004, la gran encuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la democracia en América del Sur

¿no revelaba que el 54,7% de los latinoamericanos estaban dispuestos a aceptar un “gobierno autoritario” si resolvía los problemas económicos?¹⁰³ Así, ¿habrá que poner en escena toda una gesticulación revolucionaria, teatro de la refundación política, para autorizar modestas avanzadas sociales, el reconocimiento de los excluidos por el Estado, y obligar a éste a dar un paso más hacia la equidad, cuando no a la igualdad?

Sin embargo, no se cuestiona el sistema económico. La pretensión es contentarse con incorporarle, en período de prosperidad, algunas capas populares olvidadas. Los obreros industriales bajo el peronismo o el getulismo, los sectores informales urbanos bajo Chávez, los campesinos indígenas en la Bolivia de Evo Morales. No es la “gran noche”, no es tampoco la “dictadura totalitaria” denunciada por los opositores. Acaso esos despotismos esclarecidos de un nuevo género finalmente no son sino “socialdemocracias un poco más autoritarias” que las otras. Tal vez ese “populismo” tan estigmatizado en América Latina, en contextos de una rígida alteridad social, es la única forma de gobierno disponible para quien quiere emprender un camino de construcción del Estado de bienestar. El peso de las demandas, el ascenso de la impugnación harían estallar una democracia de baja intensidad. Aquí, los mecanismos de la desmovilización no coercitiva impiden la organización espontánea y autónoma de las clases peligrosas. Sin violencia, sino, en cambio, como si la revolución estuviera a la orden del día.

Tomemos un ejemplo para ilustrar esa ambigüedad fundacional. La educación en la Argentina de los gobiernos “justicialistas” del general Perón entre 1946 y 1955 presenta dos caras. La escuela es un instrumento de adoctrinamiento re-

¹⁰³ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y de ciudadanos. Contribuciones para el debate*, Buenos Aires, 2004, p. 137.

volucionario, es decir, de peronización. Allí se enseña el caecismo peronista y todo tipo de chaturas rimbombantes alrededor del “primer trabajador”. El culto a Perón, que es la autobiografía de Evita (*La razón de mi vida*), es allí de lectura obligatoria. El de la pareja presidencial (“Perón cumple, Evita dignifica”)¹⁰⁴ desempeña la función que le corresponde. Sí, pero al mismo tiempo, nuevas capas de la población tienen acceso al secundario. El período 1946-1952 conoce así una democratización significativa de la enseñanza universitaria. Se podría extender el análisis hacia la salud en Argentina, pero también hacia la Venezuela de Chávez o, mutatis mutandis, la Bolivia del MAS, y comprobar, por otra parte, que muchos eslóganes son similares (“Evo cumple” o “Con Chávez contamos”).

La artificialidad temporal de enfrentamientos sobreactuados ¿abre la vía a una democracia representativa estable y social, una vez alcanzado un nivel adecuado de cohesión e integración? ¿O bien el riesgo autoritario es el precio que hay que pagar por la obtención de modestos y reversibles avances sociales? La fatalidad, es decir, la vía de mayor pendiente del orden político democrático, ¿conduciría a esos regímenes hacia formas duraderas de autocracia competitiva?¹⁰⁵ La disociación de la izquierda social y de la izquierda política ¿sería –como pensaba Raymond Aron–¹⁰⁶ una singularidad latinoamericana, entre tantas otras? Sin embargo hoy, a diferencia de la primera mitad del siglo XX, la exigencia simultánea de acceso a la ciudadanía y de inte-

¹⁰⁴ Sobre la propaganda del régimen peronista, véase en particular Peter Waldmann, *El peronismo (1943-1955)*, Buenos Aires, Sudamericana, 1981, así como Mariano Plotkin, *Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista, 1946-1955*, Buenos Aires, Ariel, 2006.

¹⁰⁵ Como lo temía Tocqueville, asustado por “la omnipotencia de la mayoría en los regímenes democráticos”.

¹⁰⁶ Raymond Aron, *L'Opium des intellectuels*, París, Gallimard, 1968, p. 36 [trad. esp.: *El opio de los intelectuales*, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1967].

gración social no puede sino incrementar la demanda de participación política y el apego a las libertades en adelante valorizadas por el hecho de ser practicadas. Así, en 2008, Venezuela, según las encuestas de opinión, presentaba el más fuerte porcentaje de preferencia por la democracia en el continente (82%)...¹⁰⁷

LOS LÍMITES DE LA TENTACIÓN AUTORITARIA

Sabemos cómo reconocer una dictadura. Disponemos de criterios poco discutibles para comprobar que un Estado se ha convertido o vuelto a convertir en una democracia. Mucho menos fácil es decir cuándo un régimen deja de ser una democracia, en el contexto histórico y geopolítico de la cultura liberal pluralista. ¿Dónde se ubica la línea roja, cómo y cuándo se la franquea? ¿A partir de qué transgresiones se pasa de una democracia reconocida a una autocracia?

Por supuesto, el cierre de las asambleas parlamentarias, la supresión de las elecciones, la suspensión de la Constitución dejan pocas dudas sobre la naturaleza de un régimen. La anulación de los resultados electorales también. Pero se pueden restringir los derechos de expresión y de organización en total legalidad republicana, utilizar medios de represión exorbitantes del derecho sin por ello dejar de ser una democracia. Guantánamo y la autorización de la tortura bajo G. W. Bush no hicieron de Estados Unidos un Estado autoritario. ¿Dónde se sitúan entonces el límite y el punto bajo de la democracia por debajo del cual un régimen se ubica en la gama variada de las autocracias?

Puede afirmarse que la democracia es ante todo un Estado de derecho en el cual el Ejecutivo no invade todo el espacio institucional. “Toda sociedad en la cual la garantía

¹⁰⁷ Según Latinobarómetro, en *The Economist*, 15 de noviembre de 2008.

de los derechos no es asegurada ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”, dice de manera admirable el artículo xvi de la *Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano* de 1789. Un Estado en el cual el Parlamento no es más que una cámara de registro, la justicia es puesta al servicio del gobierno y ninguna institución está en condiciones de hacer contrapeso a las decisiones del Ejecutivo no es una democracia.

Pero el Estado moderno tiene otros medios, menos llamativos, de sofocar las libertades públicas. En particular son financieros. En efecto, no se pueden olvidar los orígenes fiscales del régimen representativo. El poder que emprende gastos sin control y sin rendir cuentas utiliza fondos discrecionales y recursos extrapresupuestarios, se sale del marco constitucional. Una vez más, la Constituyente lo había establecido clara y sobriamente (art. xiv): “Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismos o por sus representantes la necesidad de la contribución pública, de consentirla libremente, de seguir su empleo y de determinar su cuota, su base tributaria, su recaudación y su duración”. Los regímenes electivos que se liberan a la vez de la libertad, de los contrapoderes y del consentimiento colectivo al impuesto y a los gastos ya no son democracias. Pero no siempre son dictaduras.

Hemos intentado distinguir los populismos latinoamericanos de los años treinta y cincuenta de los gobiernos refundadores y socializantes del siglo xxi. Separados por la historia, difieren también por el contexto internacional en el cual evolucionan. En el período entre las dos guerras, los autoritarismos están en el candelerero en Europa. Son una fuente de inspiración para el mundo entero. Hasta se cree que los días de las democracias debilitadas y amenazadas están contados. En 2000, el modelo del bien político soberano es, por el contrario, la democracia representativa. Una ola mundial barrió a las dictaduras militares en el conti-

nente. La promoción de la democracia parece incluso haberse convertido en una de las prioridades de Occidente. El siglo xxi, tras el fin del comunismo europeo, aparece como una época de consolidación democrática. Y los “neopopulismos” también son tributarios de la escena internacional.

Por otra parte, en América Latina, las democracias restauradas se preocupan por obstaculizar toda regresión autoritaria. El juicio de los pares y el derecho de injerencia prevalecen en adelante sobre los principios tradicionales asociados a la soberanía absoluta. Los procesos de integración regional, como el Mercosur, por ejemplo, adoptaron cláusulas democráticas que excluyen las aventuras autoritarias. La OEA, por su parte, más independiente de Estados Unidos tras la caída del comunismo y dotada de una Carta Democrática, participa activamente en la internacionalización del Estado de derecho en todo el continente.

La vigilancia de las ONG especializadas en la defensa de los derechos y las libertades, la de una opinión pública informada y atenta, torna dificultosos los ataques a los fundamentos del orden democrático. Chávez, por cierto, expulsó al representante de Human Rights Watch y descalificó a la asociación de periodistas Reporteros sin Fronteras acusándola de estar al servicio de Washington.¹⁰⁸ Pero la “ley mordaza” nunca fue aplicada, y el decreto ley sobre los servicios de informaciones fue abandonado. Los plazos electorales son respetados, los escrutinios son regulares. Los electores siguen siendo libres en su elección, a pesar de la enorme asimetría de la propaganda en favor del poder y la descalificación permanente de los rivales potenciales.

Un régimen autoritario, por definición, rechaza o torna imposible la alternancia, es decir, la posibilidad de cambiar, por el juego institucional, a los titulares del gobierno. En esta

¹⁰⁸ Véase Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, *Cronología de la guerra, op. cit.*, pp. 14 y 15.

fase, dicha perspectiva no parece ser la de los sistemas hegemónicos, aunque Chávez instituyó la reelección presidencial ilimitada. Sea como fuere, otras experiencias nacionales están presentes para convencernos de que la América Latina no está condenada a elegir entre una integración social portadora de justicia a través de prácticas semiautoritarias y una democracia de mercado insensible a las necesidades y las aspiraciones de la mayoría.